

## *V. El empate, 1955-1966*

AL DÍA siguiente de la victoria -si no antes-, se advirtió la heterogeneidad del frente que había coincidido para derribar al presidente Perón. El general Eduardo Lonardi encabezó el nuevo gobierno, que se presentó como provisional para indicar su decisión de restaurar el orden constitucional. Rodeado por los grupos católicos -lo más activo y también lo más reciente de la oposición- y por militares de tendencia nacionalista, el jefe de la Revolución Libertadora proclamó que no había ni vencedores ni vencidos y procuró establecer acuerdos con las principales fuerzas que habían sostenido a Perón, en particular los sindicalistas. En su opinión, el proyecto nacional y popular que aquél había fundado seguía teniendo vigencia, siempre que fuera convenientemente depurado de sus elementos corruptos o indeseables. Los dirigentes sindicales se mostraron contemporizadores con el gobierno, aunque en muchas barriadas obreras -en Avellaneda, Berisso y Rosario- hubo manifestaciones espontáneas contra los militares. Pero los partidarios de Lonardi compartían el gobierno con representantes de los grupos antiperonistas más tradicionales, respaldados por la Marina, la más homogénea de las tres Fuerzas Armadas, cuya voz expresaba el vicepresidente, contraalmirante Isaac F. Rojas. En el Ejército, luego de una lucha, se impusieron los partidarios de una

política de abierta ruptura con el derribado régimen peronista. El 13 de noviembre, apenas dos meses después de designado, Lonardi debió renunciar, y fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, más afín a los sectores liberales y antiperonistas, mientras Rojas se mantenía en la vicepresidencia.

El episodio puso rápidamente de manifiesto la complejidad de la herencia del peronismo. La fórmula con la que se había constituido aquel movimiento -autoritario, nacionalista y popular, nacido en las excepcionales condiciones de la guerra y la inmediata posguerra- ya había hecho crisis hacia 1950, cuando el mundo empezó a normalizarse, y Perón mismo inició en 1952 una reorientación sustancial de sus políticas para adecuarse a las nuevas circunstancias. Las características de su movimiento, las fuerzas sociales que lo apoyaban y que él mismo había movilizado y constituido le impidieron encarar decididamente el nuevo rumbo. Caído Perón, esas mismas fuerzas se convirtieron en un obstáculo insalvable para los intentos de sus sucesores, que declaraban querer reconstruir una convivencia democrática perdida hacía ya mucho tiempo, pero también se proponían -con menos claridad- reordenar sustancialmente la sociedad y la economía.

En 1955 ese reordenamiento era estimulado y hasta exigido por un mundo que, concluida la etapa de la reconstrucción de la posguerra y ya en plena Guerra Fría, planteaba desafíos novedosos. Las consignas de la Revolución Libertadora en favor de la democracia coincidían con las tendencias políticas de Occidente, donde la democracia liberal -práctica y bandera- dividía claramente las aguas con el Este totalitario. Al igual que en la Argentina peronista, en Estados Unidos y en Europa los Estados intervenían decididamente, ordenando la reconstrucción económica y organizando los vastos acuerdos entre empresas y trabajadores. Pero ese despliegue del *welfare State* -el Estado

intervencionista y benefactor- acompañó a una integración y liberalización de las relaciones económicas en el mundo capitalista. En 1947, los acuerdos monetarios de Bretton Woods establecieron el patrón dólar y los capitales volvieron a fluir libremente por el mundo. Las áreas cerradas fueron desapareciendo y las grandes empresas comenzaron a instalarse en los mercados antes vedados. Para los países cuyas economías habían crecido hacia adentro y cuidadosamente protegidas, como los latinoamericanos, y en particular la Argentina, el Fondo Monetario Internacional -un ente financiero que en el nuevo contexto tuvo un enorme poder- propuso políticas llamadas “ortodoxas”: estabilizar la moneda abandonando la emisión fiscal, dejar de subvencionar a los sectores “artificiales”, abrir los mercados y estimular las actividades de exportación tradicionales. No obstante, progresivamente empezó a formularse una política alternativa, elaborada sobre todo en el ámbito de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL): los países “desarrollados” podían ayudar a los “subdesarrollados” a eliminar los factores de atraso mediante adecuadas inversiones en los sectores clave, que éstos acompañarían con reformas “estructurales”, como la reforma agraria. Desde entonces, las recetas “monetarista” y “estructuralista” compitieron en la opinión y en las políticas. Podía pensarse que ambas estrategias eran en última instancia complementarias, pero en lo inmediato tenían corolarios políticos muy diferentes: mientras que la primera llevaba a revitalizar a los viejos aliados, los sectores oligárquicos, quizá a las dictaduras, la segunda impulsaba cambios profundos: una “modernización” de la sociedad que se coronaría con el establecimiento de democracias estables, similares a las de los países desarrollados.

Para adecuarse a este mundo del capitalismo reconstituido, el liberalismo y la democracia, no bastaba con restaurar el orden

constitucional y acabar con los vestigios de un régimen que se filiaba en los autoritarismos de entreguerras. Era necesario modernizar y adecuar la economía, transformar el aparato productivo. Luego de 1955, en la Argentina la apertura y la modernización fueron valores compartidos, pero las herramientas de esa transformación generaron una amplia polémica entre quienes confiaban en el capital extranjero y quienes, desde la tradición nacionalista que había alimentado el peronismo, o desde la de la izquierda antiimperialista, desconfiaban de él. Las discusiones, que dominaron las dos décadas siguientes, giraron alrededor de cómo atraerlo o de cómo controlarlo. Algunos sectores empresariales locales descubrieron las ventajas de la asociación, pero otros, crecidos y consolidados al amparo de la protección estatal, y que se sentían seguras víctimas ya fuera de la competencia o del fin de la protección, aspiraron a ponerle trabas, y encontraron eco no sólo en los nacionalistas o en las izquierdas, sino en la mayoría de las fuerzas políticas.

Los empresarios, nacionales o extranjeros, coincidían en que cualquier modernización debía modificar el estatus logrado por los trabajadores durante el peronismo. Como ya lo habían insinuado al final del régimen peronista, apuntaron a revisar su participación en el ingreso nacional y también a elevar la productividad, racionalizando las tareas y reduciendo la mano de obra. Esto implicaba restringir el poder de los sindicatos, y también el que los trabajadores, amparados por la legislación, habían alcanzado en plantas y fábricas. Recortar los ingresos y recuperar la autoridad patronal eran los puntos salientes de una actitud más general contra la situación de mayor igualdad social lograda por los trabajadores, la peculiar práctica de la ciudadanía en que se había fundado el peronismo; en esa actitud se combinaban las exigencias de cierta racionalidad empresarial con resentimientos más generales y menos

confesables, pero ciertamente fuertes en muchos de quienes se habían coligado contra Perón.

Aquí se encontraba el mayor obstáculo. Como ha señalado Juan Carlos Torre, se trataba de una clase obrera madura, bien defendida en un mercado de trabajo que se acercaba a la situación de pleno empleo, homogénea y con una clara identidad social y política. Esto resultó decisivo, debido a la indisoluble identificación de los trabajadores con el peronismo, fuerte antes de 1955, pero definitivamente sellada después de esa fecha. En un sentido general, la exclusión del peronismo de la política -que se prolongó hasta 1973- fue para los vencedores de 1955 el requisito para poder operar esa transformación en las relaciones de la sociedad, y a la vez la fuente de las mayores dificultades. Entre las fuerzas sociales embarcadas en la transformación, que no habían terminado de definir sus objetivos, primacías y alianzas, y las antiguas, que conservaban una importante capacidad de resistencia, se produjo una situación que Juan Carlos Portantiero definió como de “empate”, prolongado hasta 1966.

Tempranamente aparecía un conflicto entre la modernización y la democracia, una dificultad para conciliar las dos exigencias principales del mundo de la posguerra. Pero en lo inmediato no se lo interpretó así. La propuesta de proscribir al peronismo, que se impuso rápido en el gobierno de la Revolución Libertadora, se decidió no tanto en nombre de la racionalidad capitalista como en el de la regeneración democrática que el mundo alentaba. En la denuncia del totalitarismo peronista se había unido un conjunto vasto y heterogéneo de sectores, que inicialmente al menos también coincidieron en el diagnóstico de que el peronismo como tal era inadmisibles, pero que los antiguos peronistas, luego de un período de saneamiento, se redimirían y podrían volver a ser admitidos a la ciudadanía. La proscripción del peronismo, y con él la de los

trabajadores, definió una escena política ficticia, ilegítima y constitutivamente inestable, que abrió el camino a la puja -no resuelta- entre las grandes fuerzas corporativas.

#### LIBERTADORES Y DESARROLLISTAS

El general Aramburu, que encabezó el gobierno provisional hasta 1958, asumió plenamente la decisión de desmontar el aparato peronista. El Partido Peronista fue disuelto y se intervinieron la Confederación General del Trabajo (CGT) y los sindicatos, puestos a cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Una gran cantidad de dirigentes políticos y sindicales fueron detenidos, sometidos a un prolijo escrutinio por comisiones investigadoras y por último proscriptos políticamente. La administración pública y las universidades fueron depuradas de peronistas y se controlaron férreamente los medios de comunicación, que en su mayoría estaban en manos del Estado. Se prohibió cualquier propaganda favorable al peronismo, así como la mera mención del nombre de quien, desde entonces, empezó a ser designado como el “tirano prófugo” o el “dictador depuesto”. Por un decreto se derogó la Constitución de 1949.

Esta política fúe respaldada masivamente por la Marina, convertida en bastión del antiperonismo, pero suscitó dudas y divisiones en el Ejército, donde muchos oficiales habían acompañado a Perón casi hasta el último momento. Las discrepancias entre los antiperonistas de la primera hora y los de la última se agravaron por un problema profesional -la reincorporación de los oficiales dados de baja en los últimos años por razones políticas-, y las facciones se hicieron enconadas. El 9 de junio de 1956, un grupo de oficiales peronistas organizó un levantamiento; contaba con el apoyo de muchos grupos civiles y

aprovechaba un clima de descontento y movilización gremial. El gobierno lo reprimió con desusada violencia, ordenando el fusilamiento de muchos civiles y de los principales jefes militares, incluyendo al general Juan José Valle. Se trató de un inusitado hecho de fría violencia, que dio la medida de la tajante división que desde el gobierno se planteaba entre peronistas y antiperonistas. Desde entonces, las depuraciones de oficiales fueron frecuentes, y poco a poco el grupo más decididamente antiperonista -los “gorilas”- fue ganando el control del Ejército. Quienes sobrevivieron se adecuaron rápidamente a las nuevas circunstancias y abrazaron el credo liberal y democrático por entonces dominante, al que agregaron un nuevo anticomunismo, a tono con la vinculación más estrecha del país con Occidente.

Los militares se propusieron compartir el gobierno con los civiles y transferírselo tan pronto como fuera posible. Proscripto el peronismo, se ilusionaron con una democracia limitada a los democráticos probados, se presentaron como continuadores de la tradición de Mayo y de Caseros -Perón fue sistemáticamente comparado con Rosas-, y convocaron a los partidos que compartían el “pacto de proscripción” a integrar la Junta Consultiva, una suerte de Parlamento sin poder de decisión, presidida por el vicepresidente Rojas. El acuerdo incluía todas las tendencias del frente civil, con excepción de los comunistas, desde las conservadoras hasta las más progresistas. Estas últimas dominaron en las universidades, pese a que el ministro de Educación era un católico tradicionalista, pero pronto se enfrentaron con el gobierno cuando éste propuso autorizar la existencia de universidades privadas, según lo demandaba la Iglesia.

En política económica hubo una parecida ambigüedad. Raúl Prebisch, mentor de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), elaboró un plan que combinaba algunos principios de la

nueva doctrina con un programa más ortodoxo de estabilización y liberalización. Ésta fue la línea seguida, aunque con vacilaciones y dudas. Los instrumentos que el Estado tenía para intervenir -el *Instituto Argentino de Promoción del Intercambio* (IAPI) o el manejo de los depósitos bancarios- empezaron a ser desmontados. Se devaluó el peso y el sector agrario recibió un importante estímulo, con lo que se confiaba equilibrar las cuentas externas. Se aprobó el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, y se obtuvo la ayuda de estos organismos para los problemas más inmediatos, lo que les permitió dar al país sus contundentes recomendaciones. No hubo en cambio una legislación clara sobre el capital extranjero, cuya concurrencia -ya planteada por Perón- siguió despertando dudas. La política social fue más definida. Combinando eficiencia y represión, patrones y gerentes empezaron a recuperar autoridad en las plantas. Las convenciones colectivas fueron suspendidas, y en el marco de una fuerte crisis cíclica en 1956, los salarios reales cayeron fuertemente en 1957.

Allí, se encuentra una de las fuentes de la firme resistencia de los trabajadores. Algunos se limitaron a cantar la Marcha Peronista en los estadios de fútbol o a escribir en las paredes "Perón vuelve". Pero también las huelgas fueron numerosas y combativas, sobre todo en 1956, y fue frecuente el sabotaje o el terrorismo, con rudimentarios artefactos de fabricación casera. Sindicalistas y terroristas adherían en el fondo a estrategias divergentes y hasta enfrentadas, pero en el clima de la común represión que sufrieron unos y otros estas divergencias no afloraron. La política de los vencedores, exitosa entre otros sectores de la sociedad, que abandonaron su militancia peronista, logró en cambio soldar definitivamente la identificación entre los trabajadores y un peronismo que de momento tenía más de sentimiento que de movimiento orgánico. No variaron los elementos básicos de su ideología: el nacionalismo popular y la idea



del papel arbitral y benefactor del Estado. Como en la década anterior, no se trataba de una doctrina revolucionaria o subversiva, pero se hizo más definidamente obrera; la nostalgia del paraíso perdido implicaba a la vez una utopía, que solía materializarse en la expectativa del retorno de Perón, imaginado en un “avión negro”. Como ha señalado Daniel James, simplemente aspiraban a un funcionamiento normal y correcto de los mecanismos capitalistas, que incluían el Estado benefactor y la justicia social. Sólo que, confrontada esa aspiración con un contexto tan sustancialmente adverso, terminaba generando una reacción dura y difícil de asimilar. Ésta fue la primera novedad del peronismo en la era del antiperonismo. La otra fue el surgimiento de una capa de nuevos dirigentes sindicales, formados no en la cómoda tutela del Estado, sino en las duras luchas de esos años, y por ello mucho más templados para el combate. El gobierno libertador hizo lo posible por desplazarlos, pero fracasó por completo y debió resignarse a tolerarlos y a que progresivamente ganaran las elecciones en los sindicatos que se normalizaban. En septiembre de 1957 se reunió el Congreso Normalizador de la CGT y los peronistas, nucleados en las 62 Organizaciones, accedieron a su control, aunque compartiéndolo con algunos sectores independientes.

Proscrito el peronismo, estas organizaciones sindicales asumieron simultáneamente la representación gremial y la política, y fueron, desde entonces, la “columna vertebral” del movimiento. Desde su exilio -en Asunción, Caracas, Santo Domingo y finalmente en Madrid- Perón conservaba todo su poder simbólico, pero en lo concreto debió dejar hacer y tolerar las desobediencias para no ser negado, aunque reservándose cierto poder de veto. Perón se dedicó a reunir a todos cuantos aceptaran invocar su nombre, alentándolos y empujándolos a unos contra otros, para reservarse así la última palabra en cualquier negociación. Aprendió

una nueva técnica de conducción y la utilizó admirablemente.

Para el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyaban, el “pacto de proscripción” planteaba un problema para el futuro, mediano o inmediato: qué hacer con el peronismo. Algunos aceptaron la exclusión *sine die*, confiando vagamente en que la “educación democrática” -tal el nombre de una nueva materia de la escuela media- terminaría surtiendo su efecto. Otros aspiraban a comprender y redimir a los peronistas, y los más prácticos, sencillamente a recibir su apoyo electoral, y a través de él a “integrarlos”. Las distintas opciones dividieron a todas las fuerzas políticas. En la derecha, optaron por acercarse al peronismo algunos de los viejos nacionalistas y los conservadores “populares”. En la izquierda, la política represiva del gobierno libertador apartó pronto a muchos de un bloque antiperonista en el que hasta entonces habían convivido con sus enemigos naturales. Su misión era dirigir a la clase obrera, y ésta era peronista y no dejaba de serlo, lo que planteaba un serio problema a quienes seguían creyendo en la naturaleza burguesa o aun fascista de ese movimiento. El Partido Socialista se dividió en 1956 entre quienes se mantenían fieles a la línea antiperonista y se vincularon cada vez más con los grupos de derecha, y quienes creyeron que el partido debía construir una alternativa de izquierda para los trabajadores, más atractiva que la del peronismo. Algunos intelectuales, de la izquierda o del nacionalismo popular, se identificaron con el peronismo, mientras que para muchos otros el radical Arturo Frondizi empezó a representar una alternativa atractiva.

El ascenso de Frondizi en la Unión Cívica Radical (UCR) provocó su ruptura. Desde antes de 1955 los intransigentes convivían con dificultad con los unionistas y los sabattinistas, más cercanos a los grupos golpistas y conspirativos. Después de la caída de Perón el radicalismo se dividió: quienes seguían a Ricardo Balbín

se identificaron con el gobierno libertador, mientras que Arturo Frondizi eligió la línea de acercamiento con el peronismo, basándose en el tradicional programa nacional y popular del radicalismo, así como en su constitutiva oposición a las “uniones democráticas”. Para atraer a los peronistas, reclamó del gobierno el levantamiento de las proscripciones y el mantenimiento del régimen legal del sindicalismo. En noviembre de 1956 -cuando las elecciones presidenciales eran cosa remota- la UCR proclamó la candidatura presidencial de Frondizi, lo que aceleró la ruptura, y el viejo partido se dividió en dos: la UCR Intransigente y la UCR del Pueblo.

En 1957, acosado por dificultades económicas y una creciente oposición sindical y política, el gobierno provisional empezó a organizar su retiro y a cumplir con el compromiso de restablecer la democracia. Se convocó una Convención Constituyente, en parte para legalizar la derogación de la Constitución de 1949 y actualizar el texto de 1853, y en parte para auscultar los resultados de la futura elección presidencial. Perón ordenó votar en blanco, y esos votos - alrededor del 24%- fueron los más numerosos, aunque ciertamente muchos menos de los que el peronismo cosechaba cuando estaba en el gobierno, y casi iguales a los de la UCR del Pueblo, que era el partido oficialista. En tercer lugar, a no mucha distancia, se colocó la UCR Intransigente. La Convención resultó un fracaso y se disolvió luego de introducir enmiendas menores -una ampliación del artículo 14, que incluía el derecho de huelga-, pero las enseñanzas de los resultados electorales fueron claras: quien atrajera a los votantes peronistas tenía asegurado el triunfo, siempre que el peronismo siguiera proscripto. Esta condición era garantizada por el gobierno libertador.

Arturo Frondizi se lanzó al juego, ciertamente riesgoso. Con un discurso moderno, referencias claras a los problemas estructurales

del país y una propuesta novedosa, que llenaba de contenidos concretos los viejos principios radicales, nacionales y populares, se había convertido sin dificultades en la alternativa para las fuerzas progresistas y para un sector amplio de la izquierda. Su vinculación con Rogelio Frigerio introdujo un sesgo significativo en su discurso, al subrayar la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas y el papel que en ello debían cumplir los empresarios. La maniobra más audaz consistió en negociar con el propio Perón su apoyo electoral, a cambio del futuro levantamiento de las proscripciones. La orden de Perón fue acatada -salvo por unos 800 mil reacios-, y Frondizi se impuso en las elecciones del 23 de febrero de 1958, con algo más de 4 millones de votos, contra 2,5 millones que obtuvo Ricardo Balbín.

Frondizi presidió el gobierno entre mayo de 1958 y marzo de 1962. En la nueva versión de su programa -que decepcionaba a sus seguidores de izquierda- Frondizi aspiraba a renovar los acuerdos, de raigambre peronista, entre los empresarios y los trabajadores; éstos eran convocados a abandonar su actitud hostil e integrarse y compartir, en un futuro indeterminado, los beneficios de un desarrollo económico impulsado por el capital extranjero. Esta retórica incorporaba el novedoso tema del desarrollo, asociado con las inversiones extranjeras, y lo unía a la condena del viejo imperialismo británico. Todas las fuerzas del país moderno eran convocadas a unirse en la común oposición a los intereses, locales y foráneos, forjados en la etapa agroexportadora. Además de trazar el prospecto de un país en crecimiento y sin conflictos, la retórica, deliberadamente imprecisa, servía para justificar las arriesgadas maniobras tácticas del presidente. Se legitimaba así a los equipos técnicos que encabezaba Rogelio Frigerio -supuestamente representante de la "burguesía nacional"- así como el pacto con Perón y el acuerdo con los sindicatos. La confianza en la eficiencia

de este programa justificaba las concesiones a otros “factores de poder”, en cuestiones juzgadas secundarias, como a la Iglesia, en el campo de la enseñanza, y a los militares, entre quienes, sin embargo, se aspiraba a desarrollar una tendencia adicta, “nacional” y desarrollista.

El realismo político del presidente incluía una tendencia a inclinarse por la negociación táctica con las grandes corporaciones, y en consecuencia una escasa valoración de la escena política, que acababa de ser formalmente restaurada. Es cierto que los partidos -y en particular la UCR del Pueblo- manifestaron un rechazo *a priori* de cualquier cosa que hiciera un presidente cuya victoria consideraban ilegítima, así como escaso aprecio por las instituciones democráticas y poca fe en el valor de la continuidad institucional, al punto de especular con la posibilidad de un golpe militar. Pero el estilo político de Frondizi y su grupo -convencidos de la verdad intrínseca de sus propuestas- era de por sí poco inclinado a la discusión programática, la persuasión o la búsqueda de acuerdos políticos, ni siquiera en el ámbito de sus propios partidarios.

El nuevo gobierno tenía amplia mayoría en el Congreso y controlaba la totalidad de las gobernaciones, no obstante lo cual su poder era claramente precario. Los votos eran prestados, y la ruptura con Perón y sus seguidores era una posibilidad muy real. Las Fuerzas Armadas no simpatizaban con quien había roto el compromiso de la proscripción, ganando con los votos peronistas, y desconfiaban tanto de los antecedentes izquierdistas de Frondizi como de su reciente conversión hacia el capitalismo progresista. Los partidos políticos, escasamente interesados en la legalidad constitucional, no llegaban a conformar una red de seguridad para las instituciones, y el propio partido oficial, dirigido desde la presidencia, era incapaz de cualquier iniciativa autónoma. Quizá por eso Frondizi apostó a obrar con prontitud, mientras pudiera

hacerlo libremente, e introducir de manera inmediata cambios tales que configuraran una escena más favorable. Un aumento de salarios del 60%, una amnistía y el levantamiento de las proscripciones -que sin embargo no incluían ni a Perón ni al Partido Peronista-, así como la sanción de la nueva ley de asociaciones profesionales, casi igual a la de 1945, que la Revolución Libertadora había derogado, fueron parte de la deuda electoral. Frondizi asumió personalmente lo que llamó la “batalla del petróleo”, esto es, la negociación con compañías extranjeras de la exploración y puesta en explotación de las reservas, y al mismo tiempo anunció la autorización para el funcionamiento de universidades no estatales, lo que generó un profundo debate entre los defensores de la enseñanza “laica” y los de la “libre”, en su mayoría católicos. En los cálculos del presidente ambos debates -el del petróleo y el de la enseñanza- acabarían neutralizándose.

El meollo de la política económica fueron las leyes de radicación de capitales extranjeros y de promoción industrial, sancionadas antes de que terminara 1958. Por ellas se aseguraba a los inversores extranjeros libertad para remitir ganancias y aun para repatriar el capital. Se establecía un régimen especial a las inversiones en sectores juzgados clave para la nueva etapa de desarrollo: la siderurgia, la petroquímica, celulosa, automotriz, energía, y naturalmente el petróleo, al que todos los diagnósticos señalaban como el mayor cuello de botella del crecimiento industrial. Habría trato preferencial en materia de derechos aduaneros, créditos, impuestos, suministro de energía y compras del Estado, así como en la protección arancelaria del mercado local, todo ello manejado con un alto grado de discrecionalidad, manifiesto notoriamente en los contratos petroleros, que el presidente negoció en forma personal y secreta. Los resultados de esta política fueron notables: las inversiones extranjeras, de alrededor de 20 millones de dólares en

1957, subieron a 248 en 1959, y 100 más en los dos años siguientes. La producción de acero y automotores creció de modo espectacular y casi se llegó al autoabastecimiento de petróleo.

La fuerte expansión hizo probablemente más intensa la crisis cíclica trienal -las anteriores fueron las de 1952 y 1956-, anunciada a fines de 1958 por una fuerte inflación y dificultades serias en la balanza de pagos. En diciembre de 1958 se pidió ayuda al FMI y se lanzó un Plan de Estabilización, cuya receta recesiva se profundizó en junio de 1959, cuando Frondizi convocó al Ministerio de Economía al ingeniero Alvaro Alsogaray. Se trataba de uno de los voceros principales de las corrientes liberales, y aplicó un ortodoxo programa de devaluación, congelamiento de salarios y supresión de controles y regulaciones estatales cuyas consecuencias fueron una fuerte pérdida en los ingresos de los trabajadores y una desocupación generalizada. Esta segunda política, liberal y ortodoxa, era contradictoria con la desarrollista inicial, que se filiaba en las propuestas estructuralistas, pero en cierto modo complementaba y reforzaba sus efectos. Sin embargo, su adopción marcó el final de la ilusión integracionista y puso en evidencia la necesidad de enfrentar el obstáculo sindical.

El Plan de Estabilización puso fin a una precaria convivencia entre el gobierno y los sindicatos peronistas, que hasta entonces habían apreciado medidas gubernamentales como el fin de las proscripciones y, sobre todo, la ley de asociaciones profesionales, que establecía el sindicato único y el descuento por planilla. Pero los efectos de la política de estabilización y la dureza con que el gobierno reprimió las protestas, a partir de la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre de enero de 1959, pusieron a los sindicatos en pie de guerra. Las huelgas se intensificaron en los meses siguientes, y luego recrudeció el sabotaje. El gobierno respondió interviniendo los sindicatos y empleando al Ejército para reprimir -según lo

establecía el plan Conintes (Conmoción Interna del Estado)-, al tiempo que los empresarios, aprovechando la recesión, despedían a los cuadros más combativos de cada planta.

El año 1959 fue un punto de inflexión. La intensa ola de protesta sindical iniciada a la caída de Perón concluyó con una derrota categórica. La racionalización laboral pudo avanzar libremente, mientras que en los sindicatos se consolidaba un nuevo tipo de dirección, menos comprometida en la lucha cotidiana y más preocupada por controlar las complejas estructuras sindicales, recurriendo incluso a la corrupción o al matonismo para acallar las disidencias. Reconocieron que no podían sostener una lucha frontal y se dedicaron, más pragmáticamente, a golpear -sobre todo al gobierno-, para enseguida negociar. Augusto Vandor, jefe del sindicato metalúrgico -la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)-, fue la figura principal y arquetípica de esta nueva burocracia sindical, especializada en administrar la desmovilización, con paros generales duros de palabra pero poco combativos y negociaciones permanentes con todos los factores de poder. En momentos en que se debilitaba en el terreno de la negociación específicamente laboral, este nuevo sindicalismo adquirió una enorme fuerza en la escena política.

Esa fuerza provenía de la persistencia de un problema político pendiente e insoluble -la proscripción peronista-, pero sobre todo del fuerte hostigamiento que el gobierno sufría a manos de los militares. Éstos vieron con desconfianza el triunfo de Frondizi y se dedicaron a vigilarlo, y en particular a controlar sus relaciones con los peronistas. Se dividieron según sus diferentes opiniones acerca de cuánto debía haber de respeto a las instituciones constitucionales y cuánto de presión corporativa, que tomaba la forma de “planteo” al presidente para que adoptara determinada medida. La Marina fue más homogénea en su rechazo a la política presidencial, pero en el



Ejército dominó un faccionalismo creciente, que amplificaba las divisiones anteriores. El gobierno intentó alentar en el Ejército una tendencia que lo apoyara, pero cuando el conflicto estallaba fue incapaz de sostener a sus eventuales partidarios. A lo largo de los casi cuatro años de su presidencia, Frondizi soportó 32 “planteos” militares, algunos para exigir cambios en su línea política y otros destinados a ganar terreno en la propia institución. A todos cedió. En junio de 1959 llegó a la Comandancia en Jefe del Ejército Carlos Severo Toranzo Montero, el más duro de los jefes antiperonistas, que durante dos años ejerció una tutela pretoriana sobre el presidente. Fue el período del ministerio de Alsogaray y del Plan Conintes, y sin duda la época de mayor represión social y política.

Las tendencias pretorianas de las Fuerzas Armadas terminaron de cristalizar con la Revolución Cubana. El triunfo de Fidel Castro de 1959 había sido celebrado por demócratas y liberales, pero hacia 1960 su acercamiento al bloque socialista dividió profundamente las aguas. Las izquierdas, vacilantes ante la cuestión del peronismo, encontraron en el apoyo a la algo lejana experiencia cubana un campo de coincidencias propicio: a principios de 1961, el socialista Alfredo Palacios ganó una banca de senador en la Capital, lo que polarizó a las fuerzas progresistas y de izquierda. El anticomunismo, en cambio, prendió fuertemente en la derecha, en el liberalismo antiperonista y también en la Iglesia. América Latina y la Argentina entraban en el mundo de la Guerra Fría, y los militares, duramente interpelados por sus colegas estadounidenses, asumieron con decisión una postura anticomunista que, so pretexto de la seguridad interior, venía a legitimar el pretorianismo. Los militares asociaron con el comunismo tanto al peronismo como al grupo que orientaba Rogelio Frigerio o a los estudiantes universitarios. En momentos en que Estados Unidos empezaba a reclamar alineamiento y solidaridad contra Cuba, los militares encontraron otro espacio para

presionar a Frondizi. El presidente, que había adherido con entusiasmo a las consignas de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, era reacio a condenar a Cuba, así como a perder cierta libertad de maniobra internacional que le brindaba la existencia de una alternativa socialista en el continente. Algunos tibios gestos de independencia horrorizaron a los militares y al frente antiperonista y anticomunista: el acuerdo con el sospechoso presidente brasileño Jânio Quadros en abril de 1961; su entrevista en agosto de ese año con Ernesto Guevara, a la sazón ministro de Industrias de Cuba, y sobre todo la abstención argentina en la Conferencia de Cancilleres de Punta del Este, que expulsó a Cuba del sistema interamericano. El hecho de que los ministros de Relaciones Exteriores que acompañaban tales medidas fueran notorios dirigentes conservadores como Adolfo Mugica o Miguel Ángel Cárcano no amilanó a los militares, que presionaron duramente al presidente hasta que, un mes después de la abstención, el gobierno rompió relaciones con Cuba.

Por entonces, la marcha del proceso político y electoral acercaba al débil gobierno de Frondizi a su catástrofe final. Las elecciones de 1960, con el peronismo proscripto, habían mostrado que sus votos seguían siendo decisivos, más allá de oscilaciones menores entre el oficialismo y la principal oposición. Las elecciones de principios de 1962 debían ser más riesgosas, pues habrían de elegirse gobernadores provinciales. Para enfrentarlas con mayores posibilidades, Frondizi despidió a principios de 1961 a Alsogaray y a Toranzo Montero, dio por terminada la estabilización, adoptó una política social más flexible y se lanzó a la ardua tarea de enfrentar electoralmente a los peronistas, cuya proscripción no podía mantener sin riesgo de que éstos apoyaran a cualquiera de sus enemigos.

Como en otras ocasiones, se esbozaron distintas alternativas,

según hubiera proscripción o no. Una de ellas, la que generaba más preocupación, era el apoyo a alguna de las fuerzas de izquierda, con quienes la Revolución Cubana había creado un campo de solidaridad y entendimiento. La sola existencia de esta alternativa, a la que el sindicalismo era profundamente reacio, mostraba que el peronismo empezaba a ser trabajado por una fuerte renovación ideológica. Pero el deseo general de los dirigentes era levantar la abstención, concurrir a elecciones y recuperar espacios en las legislaturas, las municipalidades y las provincias, y el mismo Perón debió aceptarlo. Lo deseaban muchos caudillos provinciales, que suponían que no serían vetados por los militares, y lo querían particularmente los sindicalistas, dueños de la única estructura formal existente en el peronismo. A través de las 62 Organizaciones dominaron el aparato electoral y pusieron sus hombres a la cabeza de las listas. Más allá del resultado mismo de las elecciones, habían ganado la puja interna: el peronismo era el movimiento obrero, y éste a su vez era su dirección sindical, que encabezaba y administraba Vandor.

En el plano nacional, un triunfo peronista seguía siendo inadmisibles para quienes habían suscripto en 1955 el tácito pacto de proscripción, incluyendo al propio Frondizi, quien antes de las elecciones declaró que, frente a un eventual triunfo peronista, no les entregaría el poder. Pero nadie quería asumir los costos de la proscripción, y el gobierno, alentado por algunos éxitos electorales, corrió el riesgo de enfrentar al peronismo en elecciones abiertas. El 18 de marzo, los candidatos peronistas ganaron ampliamente en las principales provincias, incluyendo el distrito clave de Buenos Aires. En los agitados días siguientes Frondizi hizo lo imposible para capear la situación: intervino las provincias donde habían triunfado los peronistas, quienes se mostraron muy prudentes, cambió todo su gabinete y encargó a Aramburu una mediación con los partidos

políticos, que se negaron a respaldarlo y se declararon totalmente indiferentes ante la suerte del presidente y del sistema institucional mismo. Ésta era la señal que los militares esperaban, y el 28 de marzo de 1962 depusieron a Frondizi, quien conservó la serenidad como para organizar su reemplazo por el presidente del Senado, José María Guido, y salvar así un jirón de institucionalidad.

#### CRISIS Y NUEVO INTENTO CONSTITUCIONAL

Muchos de quienes habían acompañado a Frondizi en su último tramo rodearon al presidente Guido y a la frágil institucionalidad por él representada, buscando negociar una alternativa política que de alguna manera tuviera en cuenta a los peronistas. Pero apenas tres meses después, los militares, que habían asumido por completo su función tutelar, impusieron un gabinete definidamente antiperonista. La crisis política y la crisis económica cíclica coincidieron y se potenciaron mutuamente, dando lugar a medidas erráticas. En un fugaz ministerio de quince días, Federico Pinedo dispuso una espectacular devaluación, que favoreció en general a los grupos agropecuarios y en particular a sus amigos, según se dijo. En seguida fue reemplazado por Alvaro Alsogaray, quien repitió su receta estabilizadora, que esta vez golpeó además al sector industrial local, que había crecido durante el período frondicista.

La inestabilidad política de esos meses de 1962 reflejaba sobre todo las opiniones contrastantes de los distintos sectores de las Fuerzas Armadas, dueños no asumidos del poder. Mientras que los grupos de oficiales antiperonistas más duros controlaban el gobierno y seguían buscando una salida basada en una infinita fuga hacia adelante -la proscripción categórica del peronismo-, una posición alternativa empezó a dibujarse en el Ejército. Se constituyó en torno a los jefes y oficiales del arma de Caballería, que mandaban

los regimientos de blindados y el estratégico acantonamiento de Campo de Mayo. Reflejaba en parte una competencia profesional interna, pero sobre todo una apreciación diferente sobre las ventajas y los costos de una participación tan directa del Ejército en la conducción política. El grupo de Campo de Mayo descubría que el costo pagado por ello -la exacerbación facciosa, la división del Ejército, su creciente debilidad ante otras fuerzas- era demasiado alto y que convenía refugiarse en una actitud más prescindente, que en términos políticos significaba un acatamiento mayor a las autoridades constitucionales. Así, el legalismo esgrimido era en realidad, antes que una manifestación de creencias cívicas, una expresión de estricto profesionalismo. Creían además que la asociación de peronismo con comunismo era simplista y exagerada, y que, dada su tradición nacional y conciliadora, el peronismo podía incluso aportar algo al frente anticomunista. Esta posición se fue perfilando a lo largo de sucesivos enfrentamientos con la facción “gorila”, que hicieron crisis en el mes de septiembre, cuando unos y otros -azules y colorados, según la denominación que entonces adoptaron- sacaron las tropas a la calle y hasta amagaron combatir. Los azules triunfaron en la contienda militar y en la de la opinión pública, a la que se dirigieron sus asesores civiles: explicaron a través de sucesivos comunicados la preocupación de la facción por la legalidad, el respeto institucional y la búsqueda de una salida democrática. Poco después, grupos vinculados con ellos promovieron la aparición de una revista singular -*Primera Plana*- para defender su posición.

El triunfo azul en septiembre llevó al Comando en Jefe al general Juan Carlos Onganía, y al gobierno a quienes, al igual que Frondizi, habían tratado de estructurar un frente político que de alguna manera integrara a los peronistas. Se trataba de un grupo de políticos provenientes de la democracia cristiana y del

nacionalismo, y algunos del propio desarrollismo, a la busca de una fórmula que reuniera a militares, empresarios y sindicalistas. Disponían de varias estructuras electorales vacantes -entre ellas la Unión Popular, un partido neoperonista-, pero no del candidato, que eventualmente podría haber sido el propio general Onganía. Pero las condiciones para esta alternativa todavía no habían madurado: la mayoría de los empresarios desconfiaban de los peronistas y en general de cualquier política que no fuera estrictamente liberal; los peronistas desconfiaban de los frondicistas, mientras que las fuerzas tradicionalmente antiperonistas, como la UCR del Pueblo, denunciaban indignadas la nueva alternativa espuria e ilegítima. También se oponía la Marina, ausente de los enfrentamientos de septiembre, que el 2 de abril de 1963 realizó su propia sublevación. Esta vez el enfrentamiento con el Ejército fue violento, hubo bombardeos y cuarteles destruidos; la Marina fue derrotada, pero su impugnación tuvo éxito. Al término del episodio, el comunicado final de los azules retomaba las posturas antiperonistas y se declaraba en favor de la proscripción del peronismo.

Los frentistas insistieron en encontrar la fórmula alquímica, esta vez sin los militares, reuniendo a frondicistas, democristianos y nacionalistas. En estas negociaciones, y en las anteriores, los sindicalistas hicieron valer su poder, practicando hasta sus últimas consecuencias el “doble juego”, que no los comprometía definitivamente con ninguna alternativa y les permitía sacar provecho de todas. En enero de 1963 lograron que la CGT fuera normalizada, con lo que terminaron de redondear su estructura sindical, y de inmediato comenzaron a presionar al gobierno con una Semana de Protesta. Pero a la vez jugaron la carta política, negociando su participación en el Frente, en competencia cada vez más evidente con Perón. Las negociaciones no terminaron bien:

cuando Perón proclamó candidato a Vicente Solano Lima, un veterano político conservador que desde 1955 se había acercado al peronismo, se apartó el grueso de la UCR Intransigente y también otros grupos menores, al tiempo que el gobierno vetaba la fórmula, apelando a la legislación proscriptiva del peronismo de 1955.

Así se llegó a julio de 1963 en una situación muy parecida a las elecciones de 1957. Los peronistas decidieron votar en blanco, pero una proporción de sus votos emigró en favor del candidato de la UCR del Pueblo, Arturo liba, quien con el 25% de los sufragios obtuvo la primera minoría, y luego la nominación en el Colegio Electoral. Es probable que haya influido en ese apoyo sorpresivo la presentación como candidato del general Aramburu, que estaba siendo postulado desde 1958 para distinto tipo de alternativas, y que definió su posición en términos decididamente antiperonistas.

Arturo liba gobernó entre octubre de 1963 y junio de 1966. Esta segunda experiencia constitucional posperonista se inició con peores perspectivas que la primera. Las principales fuerzas corporativas, incapaces por el momento de elaborar una alternativa a la democracia constitucional, habían hecho un alto pero estaban lejos de comprometerse con el nuevo gobierno. El partido ganador, la UCR del Pueblo, había obtenido una magra parte de los sufragios, y si bien tenía la mayoría en el Senado, sólo controlaba algo más de la mitad de las gobernaciones y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados donde, debido al sistema de voto proporcional, estaba representado un amplio espectro de fuerzas políticas. A diferencia de Frondizi, el nuevo gobierno radical le dio mucha más importancia al Congreso y a la escena política democrática, tanto por auténtica convicción como por su escasa propensión o capacidad para negociar con las principales corporaciones. La vida parlamentaria tuvo más actividad y brillo, pero el radicalismo no logró estructurar allí una alianza consistente, ni tampoco

comprometer auténticamente a las fuerzas políticas en la defensa de la institucionalidad.

Arturo Illia, un político cordobés de la línea sabattinista, no era la figura más destacada de su partido, y es probable que su candidatura derivara de la escasa fe de los principales dirigentes en su triunfo. Dentro del abanico de tendencias del radicalismo, tenía simpatías por las posiciones más progresistas, pero debió negociar con los otros sectores, que ocuparon posiciones importantes en su gobierno. Su presidencia se definió por el respeto de las normas, la decisión de no abusar de los poderes presidenciales y la voluntad de no exacerbar los conflictos y buscar que éstos decantaran naturalmente. Las críticas se centraron en esta modalidad, tachada de irrealista e ineficiente, revelando el escaso aprecio que en la sociedad argentina existía por las formas democráticas e institucionales.

La política económica tuvo un perfil muy definido, dado por un grupo de técnicos con fuerte influencia de la CEPAL. Los criterios básicos del populismo reformista que la UCR del Pueblo heredaba del viejo programa de los intransigentes radicales -énfasis en el mercado interno, políticas de distribución, protección del capital nacional- se combinaban con elementos keynesianos: un Estado muy activo en el control y en la planificación económica. El gobierno se benefició además de la coyuntura favorable que siguió a la crisis de 1962-1963, la recuperación industrial y particularmente de dos años de buenas exportaciones. Los ingresos de los trabajadores se elevaron y el Congreso votó una ley de salario mínimo. El gobierno controló los precios y avanzó con decisión en algunas áreas conflictivas, como la comercialización de los medicamentos. Frente al capital extranjero, sin hostilizarlo, procuró reducir la discrecionalidad de las medidas de promoción. Un caso especial fueron los contratos petroleros, que habían sido un



caballito de batalla en la lucha contra Frondizi, y que fueron anulados y renegociados.

Esta política económica y social intentaba desandar parte del camino seguido después de 1955 y despertó enconadas resistencias entre los sectores empresariales, expresadas tanto por los voceros desarrollistas, que se quejaban de la falta de alicientes a la inversión extranjera, como sobre todo por los liberales, que reaccionaban contra lo que juzgaban estatismo y demagogia, y se preocupaban por los avances de los sindicatos y la pasividad del gobierno ante ellos.

Éste había intentado aplicar los recursos de la ley de asociaciones para controlar a los dirigentes sindicales, especialmente en el manejo de los fondos y de las elecciones internas, con la esperanza de que surgiera una corriente de dirigentes que rompiera el monolitismo peronista. Los sindicalistas respondieron con un Plan de Lucha que consistió en la ocupación escalonada, entre mayo y junio de 1964, de 11 mil fábricas, en una operación que involucró a casi cuatro millones de trabajadores, realizada con una planificación exacta, sin desbordes ni amenazas a la propiedad, y desmontada con igual celeridad y pulcritud. Aunque desde la derecha y desde la izquierda se quiso ver en esto el comienzo de un asalto al sistema, fue sólo una expresión, de rara perfección, de la estrategia impulsada por Vandor, capaz de obtener los máximos frutos con una movilización controlada y restringida. Tal despliegue estaba dirigido en parte a obtener concesiones del gobierno -particularmente el fin de la presión sobre los sindicatos-, pero sobre todo a hacer ver que éstos constituían un actor insoslayable y de real peso en cualquier negociación seria, esto es, la que mantuvieran con los militares, los empresarios y el mismo Perón.

El vandorismo aprovechaba así su cabal dominio de los

sindicatos y también de las organizaciones políticas del peronismo, para actuar simultánea o alternativamente en los dos frentes y practicar su arte de la negociación. En el primer semestre de 1964, y alentados por un eventual levantamiento de la proscripción, los sindicatos encabezaron una reorganización del Partido Justicialista -nuevo nombre del Peronista-, que realizaron a su estilo, pues una afiliación relativamente baja les permitió un perfecto control, lo que los fue llevando a un enfrentamiento creciente con Perón, amenazado en su liderazgo. La disputa entre ambos no podía superar ciertos límites, pues ni Perón podía prescindir de los sindicalistas más representativos ni éstos podían renegar del liderazgo simbólico de Perón. La competencia consistió en un tironeo permanente, en el que Vandor fue ganando posiciones. A fines de 1964 la dirigencia local organizó el retorno de Perón al país, una provocación al gobierno y quizás al propio Perón, de envergadura similar a la de una presentación electoral, que ponía sobre el tapete los pactos tácitos de proscripción. El Operativo Retorno suscitó una gran expectativa entre los peronistas y avivó nostalgias y fantasías. Perón tomó un avión, pero antes de que el gobierno se viera obligado a decidir qué hacer, las autoridades de Brasil lo detuvieron y enviaron de nuevo a España. No está claro quién perdió más con este resultado, si el gobierno, Vandor o el propio Perón -los acontecimientos posteriores hicieron irrelevante el balance-, pero lo cierto es que Perón estaba dispuesto a jugar sus cartas para evitar cualquier acuerdo que lo excluyera. Por entonces empezó a cobijar y alentar a los incipientes sectores críticos de la dirección sindical e inclinados a una política más dura, o incluso a seguir la senda de la Revolución Cubana.

La principal preocupación de Perón se hallaba en el campo electoral, donde podía competir mejor con Vandor. En marzo de 1965 se realizaron las elecciones de renovación parlamentaria. El

gobierno proscribió al Partido Justicialista pero autorizó a los peronistas a presentarse tras rótulos menos conflictivos, como la Unión Popular, controlados por el sindicalismo vanderista o por caudillos provinciales “neoperonistas”, que interpretaban de manera muy amplia y flexible el liderazgo de Perón. Los resultados fueron buenos para el peronismo pero no aplastantes, pues sumando todos los segmentos obtuvieron alrededor del 36% de los votos. Lograron constituir un fuerte grupo parlamentario, que encabezó un *a látere* de Vander, y empezaron a prepararse para las elecciones de 1967, en las que -como en 1962- se competiría por los gobiernos de provincia. Si Vander imponía sus candidatos en las principales provincias y lograba reunir a los grupos neoperonistas provinciales, habría logrado institucionalizar al peronismo sin Perón y armar una poderosa fuerza disidente. De alguna manera implícita, Perón y el gobierno concurrieron a enfrentarlo.

En los últimos meses de 1965, Perón envió a la Argentina a su esposa María Estela, conocida como Isabel, como su representante personal. Isabel reunió a todos los grupos sindicales adversos o refractarios al liderazgo de Vander, tanto de izquierda como de derecha, y motorizó una división en las 62 Organizaciones; aunque la encabezó el propio secretario general de la CGT, José Alonso, fracasaron en su intento de ganar la conducción sindical. Pero a principios de 1966, cuando se celebraba la elección de gobernador de Mendoza, Isabel apoyó una candidatura peronista alternativa a la que propiciaba Vander y la superó ampliamente en votos. Así, a mediados de 1966, la competencia entre Perón y Vander concluía con un empate: aquél se imponía en el escenario electoral y éste en el sindical. Quizá por eso Vander descartó de momento el escenario electoral, dirigiendo sus pasos hacia los grandes actores corporativos.

Las Fuerzas Armadas no miraban con demasiada simpatía el

gobierno de Illia -donde tenían predicamento los derrotados militares colorados-, pero se abstuvieron de hacer planteos o de presionar. En el Ejército, la prioridad del comandante Onganía y del grupo de oficiales de Caballería que lo rodeaba era la reconstrucción de la institución, el establecimiento del orden y la disciplina, largamente quebrados en los años siguientes a 1955, y la consolidación de la autoridad del comandante. Más que de respeto a las instituciones constitucionales, se trataba de la convicción de que, dadas las características de la escena política, cualquier intervención parcial provocaría divisiones facciosas. Progresivamente, las Fuerzas Armadas no hablaron más que a través de sus comandantes en jefe, y de entre ellos Onganía fue adquiriendo una primacía nacional. En 1965, en una reunión de jefes de Ejército americanos en West Point, manifestó su adhesión a la llamada “doctrina de la seguridad nacional”: las Fuerzas Armadas, apartadas de la competencia estrictamente política, eran sin embargo la garantía de los valores supremos de la nacionalidad y debían obrar cuando éstos se vieran amenazados, particularmente por la subversión comunista. Poco después completó esto enunciando -esta vez en Brasil, donde los militares acababan de deponer al presidente João Goulart- la doctrina de las “fronteras ideológicas”, que en cada país dividía a los partidarios de los valores occidentales y cristianos de quienes querían subvertirlos. Entre esos valores centrales, no figuraba el sistema democrático -que había sido la bandera de los militares luego de 1955-, lo que revela un cambio no sólo interno, sino internacional: la era inaugurada por el presidente Kennedy terminaba, Estados Unidos retomaba en Santo Domingo su clásica política de intervención y los militares comenzaban a derrocar a los gobiernos democráticos sospechosos de escasa militancia anticomunista. En este renovado discurso de las Fuerzas Armadas, que no se mostraban ansiosas por sacar de él los corolarios obvios,

la democracia empezaba a aparecer como un lastre para la seguridad. Desde esa perspectiva también lo sería, finalmente, para la modernización económica, que necesitaba de eficiencia y autoridad.

## LA ECONOMIA ENTRE LA MODERNIZACIÓN Y LA CRISIS

El programa que en 1958 sintetizó de manera convincente Arturo Frondizi expresaba una sensibilidad colectiva y un conjunto de convicciones e ilusiones compartidas acerca de la modernización económica. En parte ésta debía surgir de la promoción planificada por el Estado y de una renovación técnica y científica hacia la cual de 1955 en adelante se volcaron muchos esfuerzos. Así surgieron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de incidencia importantísima en su campo, y el menos influyente Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La investigación básica y la tecnológica fueron promovidas desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), creado en 1957, o desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que frecuentemente actuaron asociados con las universidades. El Consejo Federal de Inversiones (CFI) debía regular las desigualdades regionales, mientras que el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), creado en 1963, asumiría la planificación global y la elaboración de planes nacionales de desarrollo. En suma, un conjunto de instituciones debían poner en movimiento, planificadamente, la palanca de la inversión pública, la ciencia y la técnica.

Pero la mayor fe estaba puesta en los capitales extranjeros. Éstos llegaron en cantidades relativamente considerables entre 1959 y 1961; luego se retrajeron, hasta que en 1967 se produjo un segundo impulso, aun cuando en él pesaron mucho las inversiones de corto

plazo. Pero su influencia excedió largamente la de las inversiones directas. Los inversores tuvieron una gran capacidad para aprovechar los mecanismos internos de capitalización, ya sea de créditos del Estado o por medio del ahorro particular, que juzgaba conveniente canalizarse a través de las empresas extranjeras. También se instalaron por la vía de la compra o la asociación con empresas nacionales existentes, o simplemente por la concesión de patentes o marcas. Su influencia se notó en la transformación de los servicios o en las formas de comercialización -los supermercados fueron al principio lo más característico- y en general en una modificación de los hábitos de consumo, estimulada por lo que podía llegar a verse y apetecerse a través de la televisión. La presencia creciente del idioma inglés atestigua el grado de adaptación a los estilos mundiales que alcanzó la vida económica.

En estos primeros años, su efecto fue traumático. En la industria, las nuevas ramas -petróleo, acero, celulosa, petroquímica, automotores- crecieron aceleradamente, por efectos de la promoción y aprovechando la existencia de un mercado insatisfecho, mientras que las que habían liderado el crecimiento en la etapa anterior -textil, calzado, y aun electrodomésticos- se estancaron o retrocedieron, en parte porque su mercado se había saturado o incluso retrocedía, y en parte también porque debían competir con nuevos productos, como fue el caso del hilado sintético, que lo hizo con el algodón en el sector de los textiles. Por otro lado, aumentó la concentración, sobre todo en la industria, modificando la estructura relativamente dispersa heredada de la etapa peronista. En las ramas nuevas, donde pesaron los capitales extranjeros, esto se debió a la magnitud de las inversiones iniciales requeridas así como a las condiciones mismas de la promoción estatal, que con excepción de los automotores garantizaban esa concentración. En las actividades antiguas, tradicionalmente

dispersas, y en un contexto de contracción, algunas empresas con mayor capacidad de adaptación lograron, gracias a un crédito o a una asociación ventajosa, crecer a expensas de otras.

En suma, se creó una brecha entre un sector moderno y eficiente de la economía, en progresiva expansión, ligado a la inversión o al consumo de los sectores de mayor capacidad, y otro tradicional, más bien vinculado al consumo masivo, que se estancaba. La brecha tenía que ver con la presencia de empresas extranjeras, o su asociación con ellas, de modo que para muchos empresarios locales la experiencia fue fuertemente negativa. Lo fue, sobre todo, para muchos de los trabajadores. El empleo industrial tendió a estancarse, sin que el aumento en las nuevas empresas compensara la pérdida en las tradicionales, y se deterioraron los ingresos de los asalariados por razones tanto económicas como políticas: un mayor desahogo empresarial en el mercado de trabajo, debido a los frutos de la racionalización y la contracción, se sumaba a un recorte en la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales, sobre todo en el ámbito específico de la empresa y la planta. Así, la participación relativa de capital y trabajo en el producto bruto interno varió sensiblemente, revelando la consistencia de la fase acumulativa que se había puesto en marcha: la porción de los asalariados cayó aproximadamente del 49% del PBI en 1954 -pico máximo de la etapa peronista- al 40% hacia 1962.

El efecto traumático debía compensarse con otro renovador más fuerte y persistente, que sin embargo se relativizó bastante. Aun en el caso de las actividades modernas, los inversores nuevos debían moverse en un contexto de características singulares y arraigadas: el tipo de fábricas heredado de la etapa peronista se caracterizaba por su escala pequeña, alta integración vertical, elevados costos y escasa preocupación por la competitividad. Eran más bien grandes talleres que verdaderas fábricas modernas. Las empresas nuevas -

particularmente las de automotores- tuvieron que adecuar su tecnología y sus formas de organización a estas realidades, de las que no podían desentenderse, de modo que -como estudió Jorge Katz- su eficiencia fue mucho menor que en los países de origen. Muchas empresas vinieron a aprovechar la crema de un mercado protegido y largamente insatisfecho, antes que a realizar una instalación de riesgo con perspectivas de largo plazo. Tal lo que ocurrió con las 21 terminales de automotores existentes en 1965. Pero aun las que tenían planes de largo alcance no estuvieron dispuestas a sacrificar la protección concedida, que les garantizaba el dominio del mercado local pero las condenaba a limitarse a él.

En esos años la sociedad argentina, dominada por la problemática del desarrollo, la dependencia y el imperialismo, discutió mucho más la magnitud y el destino de las ganancias de estas empresas que su aporte -ciertamente relativo- a la modernización y competitividad de la economía y particularmente del sector industrial. Lo cierto es que los capitales extranjeros contribuyeron a mantener algunos de los mecanismos básicos, tal como se habían conformado en los años treinta y reforzado durante la guerra y la posguerra. Su horizonte siguió siendo el mercado interno, y, al igual que sus antecesoras nacionales, no fue prioritario alcanzar acá una eficiencia que les permitiera competir en mercados externos, a los que abastecían desde otras filiales, salvo con estímulos específicos. Atraídos con regímenes de promoción, pugnaron por mantener las situaciones de privilegio y hasta extenderlas, y así -junto con las empresas nacionales que pudieron seguirlos en esa línea- contribuyeron a fortalecer la injerencia de un Estado que debía garantizar las ventajas especiales.

Pese a que el gobierno había desarrollado una serie de organismos de planificación, sus políticas de promoción no tuvieron en cuenta cuestiones clave, como cuándo dejar de



promover, para estimular la competitividad, o la forma de compatibilizar las necesidades fiscales con la promoción, que generalmente consistía en la exención de impuestos. Sobre todo, fue una política errática: hubo bruscas oscilaciones, determinadas en parte por la capacidad de presión de cada uno de los interesados - como cuando el ministro Pinedo dispuso en 1962 una devaluación del 80%- y en parte por razones políticas generales -como cuando el gobierno de Illia anuló los contratos petroleros-, que reforzó en las empresas la actitud contraria de consolidar los privilegios obtenidos.

En los diez años que siguieron al fin del peronismo, la economía no sólo se transformó sustancialmente, sino que, en conjunto, creció, aunque quizá menos de lo que se esperaba. En el sector industrial, esto fue el resultado de un promedio entre el crecimiento de los sectores nuevos -muchos de los cuales tenían un ciclo de maduración largo- y la retracción de los tradicionales. En el sector agrícola empezaron a sentirse algunos efectos de los incentivos cambiados ocasionales, de las mejoras tecnológicas impulsadas por el INTA o por grupos de empresarios innovadores, o de la mayor difusión de los tractores, producidos por plantas industriales instaladas poco tiempo antes. Sin ser espectaculares, los resultados permitieron que la producción alcanzara en promedio los niveles de 1940, antes del comienzo de la gran contracción. Hubo también algunas mejoras relativas en el comercio exterior. Todo ello fue la base de una etapa de crecimiento general sostenido pero moderado, sustentado principalmente en el mercado interno, iniciada en los años del gobierno de Illia, que se prolongaría hasta mediados de la década siguiente. Perceptible a la distancia, esta bonanza relativa permaneció oculta a los contemporáneos, cuya perspectiva estuvo dominada por los ciclos de expansión y contracción, y las violentas crisis que los separaban.

Las crisis estallaron con regularidad cada tres años -1952, 1956, 1959, 1962, 1966- y fueron puntualmente seguidas por políticas llamadas “de estabilización”. Desde un punto de vista estrictamente económico, expresaban las limitaciones que desde 1950 experimentaba el país para un crecimiento sostenido. La expansión del sector industrial y del comercial y de servicios ligados al mercado interno dependía en último término de las divisas con las que pagar los insumos necesarios para mantenerlo en movimiento. Éstas eran provistas por un sector agropecuario con escasas posibilidades de expandirse, que afrontaba difíciles condiciones en los mercados mundiales y que era habitualmente usado, a través de las políticas cambiarias y de precios relativos, para solventar al sector interno. De ese modo, todo crecimiento de éste significaba un aumento de las importaciones y concluía en un déficit serio de la balanza de pagos. El endeudamiento externo, creciente en la época, y la necesidad de cumplir con los servicios agregaban un elemento adicional a la crisis y un motivo de interés para los acreedores y sus agentes. Los planes de estabilización, que recogían la normativa estándar del Fondo Monetario Internacional -al cual se recurría en la emergencia-, consistían en primer lugar en una fuerte devaluación, y luego en políticas recesivas -suspensión de créditos, paralización de obras públicas-, que reducían el empleo industrial y los salarios, y con ellos las importaciones, hasta recuperar el equilibrio perdido, creando las condiciones para un nuevo crecimiento.

Cada uno de estos ciclos de avance, detención y nuevo avance -capaces de justificar el difundido pesimismo acerca del futuro de la economía- se inscribía en el contexto de la puja por el ingreso entre los distintos sectores, que a su vez formaba parte de la puja política más general, pues al empate político correspondía un empate económico. En una negociación entre varias partes, los beneficiados

y los perjudicados cambiaban en forma permanente, así como las alianzas y los enfrentamientos. En las fases ascendentes, los intereses de empresarios y trabajadores industriales podían coincidir, a costa de los sectores exportadores: esta coincidencia, que fue una de las bases de la alianza peronista, explica el margen de negociación logrado por los sindicatos luego de 1955. Otras veces -y en estos años fue más frecuente-, los empresarios aprovecharon la coyuntura para capitalizarse intensamente. Con la crisis y la devaluación había en primer lugar una traslación de ingresos del sector urbano al rural, pero también de los trabajadores a los empresarios, pues los salarios reales retrocedían ante la fuerte inflación. También solían perder las empresas chicas a manos de las grandes, y en esas coyunturas la concentración de la propiedad avanzó a saltos.

En suma, la crisis potenció la puja por el ingreso entre aquellos sectores con capacidad corporativa para negociar y creó la posibilidad de aprovechar una coyuntura, un cambio de las reglas del juego, producidas desde el poder, y quedarse con la parte del otro. Se trataba de un juego en el que no había reglas racionales y previsibles, ni un sector capaz de imponérselas al otro. Si bien la acción del Estado era decisiva, no se trazaban desde allí políticas autónomas, sino que estaba a disposición de quien pudiera capturarlo un instante, y utilizarlo para sacar el mayor provecho posible. Hubo entre los sectores propietarios quienes advirtieron las posibilidades que ofrecía un funcionamiento tan anormal para los parámetros del capitalismo y descubrieron las ventajas de la indisciplina. Hubo otros, en cambio, cuyas mejores posibilidades radicaban en el establecimiento del orden y la racionalidad, y empezaron a reclamar la presencia, en el poder político, de quien pudiera cumplir esa tarea.

## LAS MASAS DE CLASE MEDIA

La modernización económica introdujo algunos cambios profundos en la sociedad, pero también dio nuevo impulso a transformaciones que venían de antaño, de modo que los efectos potencialmente conflictivos de aquéllas no se manifestaron de inmediato. La fuerte migración del campo a la ciudad, que caracterizó este período, en realidad formaba parte de una tendencia iniciada en la década de 1940. Cambió en parte el lugar de origen: de las tradicionales zonas pampeanas, donde ya la crisis agrícola había completado su obra de expulsión, se desplazó a las zonas tradicionalmente pobres del nordeste y el noroeste, golpeadas además por la crisis de sus economías regionales, como el algodón o el azúcar. También comenzaron las de los países limítrofes. Siguieron llegando al Gran Buenos Aires, que en esos años, con el 36% de la población total, alcanzó el pico de su crecimiento relativo, pero también a otros grandes centros urbanos, entre los que empezó a despuntar Córdoba.

Quizá la mayor novedad estuvo en la forma de incorporación a las ciudades. El empleo industrial, que había sido la gran vía durante la década peronista, se estancó y aun retrocedió, y su lugar fue ocupado por la construcción -las obras públicas, a cargo de grandes empresas, y también la construcción particular, dominada por el pequeño empresario-, que junto al pequeño comercio y algunas actividades de servicios absorbieron a los migrantes internos y también a los contingentes de bolivianos, paraguayos o chilenos, cuya migración contribuyó a ampliar la masa de trabajadores.

No era sólo la posibilidad del empleo, en general precario, lo que movilizaba a los migrantes, sino también el deseo de disfrutar de los atractivos de la vida urbana, y en ese sentido las migraciones forman parte del proceso social de la Argentina expansiva, de permanente

incorporación a los beneficios del progreso, reforzado por la difusión de las comunicaciones, y particularmente la televisión. El resultado fue el fenómeno, muy común en toda América Latina, de la nueva marginalidad: un cinturón de “villas miserias” en las grandes ciudades y sus alrededores, donde se combinaban, de manera sorprendente para los observadores, casas de lata y antenas de televisión.

El mundo de los trabajadores urbanos experimentó cambios profundos. El número de asalariados industriales se mantuvo estable, y en consecuencia perdió importancia relativa. Fueron en general víctimas de las políticas sociales regresivas que dominaron en estos años, salvo durante el período de Illia, aunque los cambios económicos produjeron una gran dispersión de los ingresos y claras ventajas en favor del sector de los trabajadores de empresas modernas. Los sindicatos organizaron una eficaz resistencia y se anotaron buenos tantos en la puja distributiva, los suficientes como para no quedar descolocados ante sus bases, y contribuyeron a mantener la homogeneidad de la clase obrera, sindicalizada y peronista. El mayor crecimiento se registró entre los obreros de la construcción, y sobre todo entre los trabajadores por cuenta propia, ligados a los servicios o al pequeño comercio. Su expansión correspondía todavía a las necesidades de la economía, y antes que desempleo disfrazado, se trataba de trabajo complementario, normalmente remunerado, aunque precario y carente de la protección sindical. El sector de los desprotegidos, que se expandió precisamente cuando el Estado de bienestar renunciaba a algunas de sus responsabilidades, comenzó a constituir, en forma progresiva, una de las fuentes de tensión de la sociedad.

Nuevos contingentes engrosaron el impreciso pero bien real sector de las clases medias, prolongando y culminando el proceso secular de expansión, diversificación y movilidad de la sociedad.

Pero esta apreciación global incluye importantes cambios internos, que matizan fuertemente su sentido. Según los análisis de Susana Torrado, los pequeños empresarios manufactureros se redujeron de manera drástica por obra de la concentración industrial, y aunque aumentó el número de comerciantes, en conjunto los sectores medios autónomos fueron menos numerosos. Creció en cambio el número de los asalariados de clase media, presentes en todos los sectores de la economía y en especial en la industria, donde las nuevas empresas demandaron técnicos y profesionales.

Su presencia puso de relieve el papel decisivo que en esta etapa siguió teniendo la educación, la vía de ascenso por excelencia de los sectores medios. Consolidada la primaria, se prolongó la expansión de la enseñanza media, cuya matrícula creció en forma espectacular en la década peronista, y luego la universitaria, donde se empezaron a plantear los problemas de la masividad. Viejas y nuevas expectativas conflúan en este crecimiento: la tradicional búsqueda del prestigio anejo al título, el deseo de participar -a través de las nuevas carreras- en el proceso de modernización de la economía y de la ciencia, y luego, también, el deseo de incorporarse a uno de los foros intelectuales y políticos más activos. Pero la mecánica tradicional empezaba a revelar fallas: los egresados universitarios aumentaron mucho más rápido que los empleos -uno de los signos de la debilidad de la modernización anunciada-, mientras que, progresivamente, se producía una pérdida de valor de los títulos, y, por ejemplo, para determinadas posiciones no bastaba ya el de bachiller. Aquí también empezaba a anunciarse uno de los focos de tensión de la nueva sociedad.

Entre las clases altas, los cambios completaron los anunciados en la década peronista. Pese a la caída del régimen odiado, las viejas clases altas no recuperaron su antiguo prestigio: la posesión de un apellido, o la frecuentación de las secciones de sociales de *La Prensa*

o *La Nación*, no aseguraban por sí ni riqueza ni poder. Las elites siguieron diversificándose y se nutrieron de nuevos empresarios, militares -con frecuencia también devenidos dirigentes de empresa- y hasta algún gremialista particularmente exitoso.

Lo más característico de estos años fue la emergencia y visibilidad de la capa de los así llamados ejecutivos, que según su nivel se ubicaban entre las clases altas o las medias. Eran por una parte la expresión de la modernización económica, el signo de que las empresas dejaban de ser manejadas por los hijos de las familias fundadoras y pasaban a manos de funcionarios expertos, dueños de la eficacia y de una cultura internacional. Como tales, fueron glorificados como héroes civilizadores. Pero también aparecieron como la nueva versión del *parvenú*, un poco “rastacuero”, por la exhibición agresiva de la riqueza y por lo que era juzgado como la usurpación de los signos del estatus. Contenían la grandeza y la miseria de la modernización.

Los cambios en las formas de vida fueron notables, sobre todo en las grandes ciudades. La píldora anticonceptiva y en general una actitud más flexible sobre las conductas sexuales y sobre las relaciones familiares modificaron la relación entre hombres y mujeres, aunque tales cambios reflejaron sólo mínimamente -en una sociedad todavía pacata y tradicionalista- los que se estaban produciendo en los países centrales. El voseo empezó a imponerse en el trato cotidiano y la conversación se nutrió de términos tomados de la sociología y del psicoanálisis, una de las pasiones de los sectores medios, que constituyeron en Buenos Aires una de las mayores comunidades psicoanalíticas del mundo. Al igual que en el resto del mundo, los cambios en el consumo empezaron a resultar claves en la diferenciación social. Era significativo que los nuevos sectores populares, a diferencia de sus antecesores de la primera mitad del siglo, no pusieran sus esperanzas en la casa propia -

símbolo mismo de la movilidad social-, sino en el televisor, en parte porque aquélla se había tornado inalcanzable, en parte por la singular combinación de placer inmediato y prestigio que proporcionaba el televisor, y luego el aparato electrónico o la motocicleta. Entre las clases medias, fue el automóvil lo que colmó sus expectativas e ilusiones, pero también los libros entrarán en el círculo del consumo masivo, y los *best sellers* comenzarán a constituir una referencia.

Fuerzas poderosas impulsaban la expansión y la homogeneización del consumo: la producción en masa, la propaganda, las técnicas del *marketing*, pero también tendencias más profundas a la democratización de las relaciones sociales y al acceso generalizado a bienes tradicionalmente considerados como propios de las clases altas. Todos consumieron muchos más productos novedosos. En cada ciudad, el viejo “centro” perdió importancia, y los nuevos centros comerciales se esparcieron por todos los barrios; el *jean* se convirtió en prenda universal, y, en su aspecto al menos, las ciudades aparecieron habitadas por vastas masas de clases medias. Pero si el *jean* homogeneizaba todo e impedía que las diferencias sociales cristalizaran en apariencias fijas, generaba de inmediato un movimiento inverso: la recurrencia a marcas exclusivas y caras, visibles en etiquetas conspicuas, que rápidamente era absorbido por la falsificación o la vulgarización de esas etiquetas. Así, frente a la homogeneización de las apariencias, las clases medias acomodadas y los sectores altos de la sociedad, estimulados por una polarización creciente de los ingresos, buscaron formas originales de diferenciación a través de una exclusividad que debía cambiar permanentemente de referencias, antes de que la vulgarización las atrapara. Saber en cada circunstancia qué es lo que marcaba esa diferencia, y conocer el momento en que lo *in* se convertía en *out*, y lo *distinguido* en *mersa*



o *cache* -según el curioso código del humorista Landrú- pasó a ser una ciencia apreciada y el tema de los más leídos semanarios.

Uno de ellos, *Primera Plana*, cumplió una función esencial en la educación de los nuevos sectores medios y altos. Apareció en 1962, para servir de vocero a los grupos que empezaban a nuclearse detrás del general Onganía y de la evanescente fórmula del “frente”. Pero además -o quizá precisamente por eso- asumió con entusiasmo y una cierta ingenuidad la tarea de difundir la modernidad entre unos lectores que, gracias a la profusión de claves para iniciados que su lectura demandaba, debían ser ellos mismos una minoría, reclutada entre las nuevas capas profesionales y los ejecutivos eficientes. Para ellos se revelaban los secretos de lo que debía saberse sobre la “vida moderna”, las últimas conquistas de la ciencia o la nueva literatura latinoamericana, cuyo *boom* recibió un decisivo impulso, así como de todo aquello cuyo consumo marcara la diferencia. En otro registro, un personaje de historieta que iba a conquistar la inmortalidad -Mafalda, de Quino- expresó toda otra gama del imaginario de las clases medias, combinando la ilusión del auto -un modesto Citroen- y de las breves vacaciones anuales con las preocupaciones por el pacifismo, la ecología o la democracia, comunes a la ola de disconformismo y renovación que se insinuaba en el mundo. Quizá por eso *Mafalda* alcanzó difusión internacional y, pese a expresar una sensibilidad tan distinta, coincidió con *Primera Plana* en mostrar cuán cerca del mundo estaba el país por entonces.

#### LA UNIVERSIDAD Y LA RENOVACIÓN CULTURAL

Los intelectuales antiperonistas -y entre ellos quienes habían logrado identificarse tanto con el rigor científico cuanto con las corrientes estéticas y de pensamiento de vanguardia- pasaron a

regir las instituciones oficiales y el campo de la cultura todo, dominado por la preocupación de la apertura y la actualización. Viejos grupos, como el Colegio Libre de Estudios Superiores, o Sur, perdieron relevancia, desplazados por nuevas instituciones y muchas veces debilitados por las escisiones internas. Las vanguardias artísticas se concentraron en el Instituto Di Tella, combinando bajo el amparo de una empresa por entonces pujante y modernizada la experimentación con la provocación. Quienes animaban esa experiencia -y en particular Jorge Romero Brest- estaban convencidos de recrear en Buenos Aires un verdadero centro internacional del arte, y si el diagnóstico quizás era excesivamente optimista, lo cierto es que, como pocas otras veces, la creatividad local se vinculó con la del mundo. Ubicado en el centro mismo de la ciudad, en la llamada “manzana loca”, y cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, el Di Tella se convirtió en punto de referencia de otras corrientes, emergentes y medianamente contestatarias, pero por cierto provocativas, como el *hippismo*.

El principal foco de la renovación cultural estuvo en la universidad. La designación en 1955 de José Luis Romero como rector de la de Buenos Aires, con el respaldo del poderoso movimiento estudiantil, marcó el rumbo de los diez años siguientes. Estudiantes e intelectuales progresistas se propusieron en primer lugar “desperonizar” la universidad -esto es, eliminar a los grupos clericales y nacionalistas, de ínfimo valor académico, que la habían dominado en la década anterior- y luego modernizar sus actividades, acorde con la transformación que la sociedad toda emprendía.

Según la utopía del desarrollo dominante, la ciencia debía convertirse en palanca de la economía, lo que planteó un largo debate acerca de las prioridades: ciencias básicas, que trabajaran según los estándares internacionales, o tecnología aplicada, mirando

los problemas específicos de nuestra economía y atendiendo a la formación del personal calificado que ésta podía requerir. Frente a la vieja universidad profesional surgió una nueva, orientada a la biología, la bioquímica, la física, la agronomía o la computación; las facultades se nutrieron con laboratorios y científicos con dedicación exclusiva a la enseñanza y a la investigación, y los egresados marcharon masivamente a completar su formación en el exterior. Incluso las viejas carreras cambiaron: la economía y la administración de empresas -escuela de ejecutivos- empezaron a reemplazar la vieja formación de los contadores públicos.

En las ciencias sociales -una idea de por sí moderna- la modernización se asoció con dos nuevas carreras: psicología y sociología. En la escuela fundada por Gino Germani, la teoría de la modernización, muy fácil de integrar con la del desarrollo económico y hasta con el marxismo, constituía a la vez un diagnóstico y un programa, mutuamente potenciados: las sociedades marchaban todas por un camino similar, de lo tradicional a lo moderno, y la ciencia indicaba el camino para que la Argentina recorriera esas etapas y por esa vía se incorporara al mundo. La sociología suministraba a la vez una filosofía de la historia, un vocabulario -frecuentemente malas traducciones del inglés- y otros signos de modernidad, y una vasta camada de nuevos profesionales, que podían dedicarse al *marketing* o a las relaciones industriales en las empresas, o a trabajar en los distintos organismos de planeamiento e investigación desarrollados por el Estado. Antes de que los subocupados o desocupados predominaran entre ellos, los sociólogos constituyeron, con psicólogos, economistas, científicos y técnicos industriales, toda una cohorte de nuevos sectores medios, adalides de la modernización y consumidores privilegiados de sus productos.

Desde 1955, la universidad se gobernó según los principios de la

Reforma Universitaria de 1918, verdadera ideología de estudiantes e intelectuales progresistas: autonomía y gobierno tripartito de profesores, egresados y alumnos. Desde el comienzo, sus relaciones con los gobiernos fueron conflictivas y la ruptura se produjo cuando el presidente Frondizi decidió autorizar las universidades privadas - eufemísticamente llamadas “libres”- en igualdad de condiciones con las del Estado. El debate de 1958 entre los partidarios de la enseñanza “libre” -básicamente los ligados a la Iglesia- y la “laica” - que nucleaba todo el arco liberal y progresista- fue notable, aunque la masividad del apoyo a “la laica” no logró cambiar la determinación de Frondizi de entregar ese botín a uno de los factores de poder que reconocía. La confrontación -renovada posteriormente en los reclamos por mayor presupuesto- mostró cómo la universidad se convertía en un polo crítico no sólo del gobierno, sino de tendencias cada vez más fuertes en la sociedad y la política, y a la vez cómo se procesaba de manera interna ese cuestionamiento, político pero no partidario y preocupado por mantener -más allá de los avatares de la política nacional- el arco de las solidaridades progresistas: en primer lugar la fe en la ciencia y luego la confianza en el progreso de la humanidad, ejemplificado en la amplia solidaridad despertada por la Revolución Cubana. En ese sentido, y gracias a su autonomía, la universidad se convirtió en una “isla democrática” en un país que lo era cada vez menos y -lo que es peor- que creía cada vez menos en la democracia, de modo que la defensa misma de la “isla” contribuyó a consolidar las solidaridades internas.

No se trataba, sin embargo, de una isla con voluntad de encierro. Mientras germinaban en ella multitud de propuestas políticas que luego se transferirían al debate de la sociedad, la universidad se preocupó intensamente, aunque con éxito desigual, por la extensión de sus actividades a la sociedad toda. El ejemplo

más exitoso de ello fue Eudeba, la editorial fundada por la Universidad de Buenos Aires y organizada primero por Arnaldo Orfila Reynal -*alma mater* de dos editoriales mexicanas de honda influencia en el mundo intelectual, el Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI- y luego por Boris Spivacow, que recreó en la década del sesenta los grandes proyectos editoriales populares de los años treinta y cuarenta. Lo singular de Eudeba fue su combinación de política de ventas agresiva y novedosa -libros muy baratos, quioscos en las calles- puesta al servicio de la difusión de lo más moderno en el campo de las ciencias. Sus tiradas -vendió tres millones de ejemplares entre 1959 y 1962- muestran tanto la realidad de la ampliación del público lector como el decisivo papel de la universidad y su editorial para conformarlo.

En este polo de modernidad concentrado en la universidad empezaron a manifestarse tensiones crecientes. El valor absoluto de la ciencia universal -ya presente en las discusiones sobre ciencia básica o tecnología- fue cuestionado a la luz de las necesidades nacionales. Se debatió primero el financiamiento de muchos grupos de científicos por fundaciones internacionales -que solían estar vinculadas con grandes empresas, como la Fundación Ford, o con los mismos gobiernos- suponiendo que tal financiamiento orientaba las investigaciones en una dirección irrelevante o directamente contraria a los intereses del pueblo y la nación. De allí se pasó al cuestionamiento de los paradigmas científicos mismos, postulando una manera “nacional” de hacer ciencia, diferente de la que se identificaba con los centros internacionales de dominación, y a la larga se cuestionaría la necesidad misma de la ciencia. El llamado a mirar al país, o a Latinoamérica, entroncaba con la cuestión del compromiso de los intelectuales con su realidad, un viejo debate -lo habían animado en los años de 1920 los partidarios de Boedo y Florida- que encontraba nuevos motivos. Si bien el

compromiso era un valor compartido entre el conjunto de los intelectuales progresistas -que no vacilaban en manifestarse masivamente en favor de la Cuba agredida-, había quienes cuestionaban la supuesta neutralidad de la ciencia -defendida por los “cientificistas”- e insistían en su carácter siempre valorativo. Una discusión similar planteaban en el campo artístico quienes cuestionaban la frivolidad y falta de compromiso del Di Tella y contraponían por ejemplo el teatro realista de Roberto Cossa o Germán Rozenmacher -que tematizaban las perplejidades de las clases medias ante el peronismo- con el teatro del absurdo de la “manzana loca”.

Por entonces, y pese al voluntarismo de los núcleos modernizadores, la realidad nacional no hacía sino mostrar la superficialidad de los cambios, así como el vigor de las resistencias que esos cambios despertaban en la sociedad tradicional. Pero, sobre todo, fue el giro a la izquierda de buena parte del núcleo progresista el que reveló la imposibilidad de mantener los acuerdos en los que esa experiencia se había fundado.

#### LA POLÍTICA Y LOS LÍMITES DE LA MODERNIZACIÓN

La radicalización de los sectores progresistas y la formación de una nueva izquierda -cuya trayectoria han reconstruido Oscar Terán y Silvia Sigal- tuvieron en la universidad su ámbito privilegiado antes de partir, luego de 1966, hacia destinos más amplios. Pero hasta esa fecha su penetración en otros círculos fue escasa -los gremiales estaban celosamente custodiados por un sindicalismo siempre hostil-, y fue en la universidad y sus debates donde los intelectuales construyeron y reconstruyeron sus interpretaciones y sus discursos, que con posterioridad encauzarían en una amplia gama de opciones políticas.

La ruptura entre el sector más progresista de los intelectuales y sus aliados más conservadores del frente antiperonista, anunciada desde antes de 1955, cristalizó casi de inmediato, por obra de la política antipopular y represiva del gobierno libertador, y sobre todo por una suerte de culpa ante la incompreensión de unas mayorías populares cuya persistencia en el peronismo, más allá de la acción del aparato estatal, quedó demostrada en las elecciones de 1957. Desde Sur hasta el Partido Socialista, las agrupaciones y los partidos que habían cobijado a la oposición antiperonista sufrieron todo tipo de fracturas. La atracción que ejerció Frondizi entre los progresistas independientes y aun entre militantes de los partidos de izquierda tradicionales obedecía a que proponía la apertura al peronismo sin renunciar a la propia identidad; se debía al enérgico tono antiimperialista -un valor por entonces en alza-, y sobre todo a la modernidad y la eficacia que informaba su estilo político, que combinaba las ilusiones de la época con las tentaciones, más propias de los intelectuales, de acercarse al poder sin pasar por los filtros de los partidos. La desilusión, que sobrevino pronto, inició una etapa de reflexión, crítica y discusión que culminó en la formación de la “nueva izquierda”.

Se formó mirando al peronismo primero y luego a la Revolución Cubana. Se caracterizó por la espectacular expansión del marxismo, fuente de las creencias básicas: se era marxista o no se lo era. Dentro de él, las variedades eran infinitas; la ortodoxia estalinista retrocedió frente a nuevas fuentes doctrinarias: Lenin, cuyo lugar central se mantuvo por sus tesis sobre el imperialismo, Sartre, Gramsci, Trotski, Mao, de las que se derivaban todas las interpretaciones imaginables -desde condenar al peronismo hasta abrazarse con él-, legitimadas en un Marx que daba para todos. Paralelamente, se expandió el antiimperialismo, recogiendo una ola mundial que partía de los movimientos de descolonización de la posguerra,

seguía con los países del Tercer Mundo, continuaba con la guerra de Argelia y culminaba con la incipiente lucha de Vietnam, todo lo cual parecía anunciar la inminente crisis de los imperios. La desilusión con Frondizi, y con su equivalente brasileño Juscelino Kubitschek, el asesinato de Kennedy y la intervención estadounidense en Santo Domingo, en 1965, diluyeron las ilusiones en la Alianza para el Progreso, y las teorías del desarrollo dejaron paso a las de la dependencia, que reelaboraba los motivos anteriores pero subordinando las raíces del atraso a situaciones políticas, frente a las cuales la opción era una alianza nacional para la liberación. Este populismo tendió un puente hacia sectores cristianos que, relejendo los evangelios en clave popular, se interesaron en dialogar con el marxismo, mientras que el antiimperialismo vinculó estas corrientes con sectores del nacionalismo, también en intenso proceso de revisión. De Hernández Arregui -cuyo libro *La formación de la conciencia nacional* fue clave en esta amalgama- a José María Rosa, intelectuales nacionalistas incorporaron el marxismo -en su vertiente más crudamente economicista- rehaciendo un camino que, en sentido opuesto, habían recorrido Rodolfo Puiggrós y Jorge Abelardo Ramos, autores de otros dos libros de enorme influencia: *Historia crítica de los partidos políticos* y *Revolución y contrarrevolución en Argentina*. A su vez, las izquierdas revisaron su interpretación liberal de la historia -en la que Rosas encarnaba el feudalismo y Rivadavia el capitalismo- y empezaron a releerla a la luz del revisionismo, un camino que les permitía, al final, asignar al peronismo un lugar legítimo en el progreso de la humanidad.

La amalgama fue difícil y la polémica intensa. La Revolución Cubana -en cuyo apoyo todos coincidieron- tuvo la virtud de resumir la mayoría de esos sentidos. Mostraba a América Latina alzada contra el imperialismo, sobre todo luego de la expansión de



la guerrilla en Venezuela, Colombia y Perú, y llevaba a una revalorización cultural que iba desde las fuerzas telúricas hasta la “nueva novela”. La conexión estrecha entre marxismo y revolución, que se desdibujaba al contemplar los grandes partidos europeos o la propia Unión Soviética, se manifestaba con toda su fuerza en Cuba. Antes de que se extrajeran de ella recetas políticas específicas, Cuba consagró la idea misma de revolución, la convicción de que, pese a sus pesadas determinaciones, la realidad era plástica y que la acción humana organizada podía modificarla. Esa transformación, cuya posibilidad era reforzada por su necesidad histórica, era una cuestión política, que se jugaba en el poder y postergaba o subordinaba otras cuestiones como el crecimiento económico, el progreso científico o la modernización cultural. Para la vertiente nacionalista, el sujeto de esta transformación seguía siendo, en clave romántica, el pueblo, mientras que para la izquierda lo era el trabajador, detrás de quien, como ha dicho con agudeza Terán, no se vislumbraba todavía al guerrero.

Efectivamente, la nueva izquierda todavía no tenía claro qué hacer. Miraba con avidez al peronismo, alentaba sus variantes “duras” -algunos militantes sindicales, o John William Cooke, que venía de una larga residencia en Cuba-, especulaba con su vuelco a la izquierda, y empezaba a jugar con diversas alternativas: el leninismo -que privilegiaba la acción de masas-, el foquismo -que buscaba constituir un polo de poder a través de la guerra irregular-, o el “entrismo”, decidido a ganar al peronismo desde adentro. Nada estaba definido en 1966, salvo el rechazo cada vez más categórico de la tradición liberal y democrática. Para la nueva izquierda -que no separaba los principios más generales de la inmediata experiencia argentina- la democracia era apenas una forma, las libertades individuales una farsa, e ilusionarse con ellas era sólo encubrir la opresión.

En realidad, nadie tenía demasiada fe en la democracia, ni siquiera los partidos políticos que debían defenderla. Ciertamente se trataba de una democracia ficticia y de escasa legitimidad, pero los interesados directos en su supervivencia y mejora la dieron por caduca sin lucha, hasta que el final anunciado llegó. Si las izquierdas creían que se trataba de un opio burgués, el frondicismo prefería apostar a la eficiencia tecnocrática mientras que los radicales del Pueblo y sus aliados no vacilaron, en ocasiones, en preferir un golpe militar a un gobierno que abriera demasiado el juego a los peronistas. Éstos -los menos responsables, dada su exclusión- fluctuaban en la apuesta a las elecciones o a la negociación directa con los factores de poder. La derecha, por su parte, no lograba organizar un partido capaz de hacer atractivos sus intereses al conjunto de la sociedad, en parte por los problemas ya crónicos de estas fuerzas, que sólo funcionaron eficazmente cuando se las articuló desde el poder, y en parte porque, en el seno mismo de los sectores propietarios, subsistían los conflictos y no se había llegado a conformar una propuesta que fuera válida para todos ellos, y mucho menos para un sector mayoritario de la sociedad.

Los sectores más concentrados de la economía, en los que el capital extranjero tenía un peso decisivo, se movían con más comodidad en la escena corporativa, donde sus intereses eran formulados con precisión y claridad por un grupo de bien entrenados economistas y técnicos. Allí dialogaban con los factores de poder reales -los sindicalistas, las Fuerzas Armadas, y en menor medida la Iglesia- que por distintos motivos tampoco tenían mayor interés en fortalecer la escena democrática. Los sindicalistas, dirigidos por Vandor, habían probado sin suerte la arena electoral, donde Perón los había derrotado; los militares estaban cada vez más consustanciados con su papel tutelar del Estado y defensor de los valores occidentales y cristianos. Se trataba, sin embargo, de una

negociación empantanada, a mitad de camino entre la democracia y el autoritarismo, donde ninguno de los actores tenía la fuerza para volcar en su favor la situación, pero podía vetar eficazmente cualquier alternativa que lo excluyera.

Las voces para romper el empate empezaron a multiplicarse. Para los militares, la democracia resultaba un obstáculo en el combate contra un enemigo comunista imaginado, que veían cada vez más amenazador. Si habían llegado a admitir que el grueso del sindicalismo peronista era de momento rescatable, en cambio lo veían enseñoreado en la universidad, desde donde se intentaba fascinar al peronismo; se alarmaban por la atracción que ejercía la Revolución Cubana y los horrorizaba el cuestionamiento de los valores tradicionales de la sociedad y la convivencia, pues en el fondo la libertad sexual, la revolución y el arte de vanguardia les parecían distintos aspectos de un mismo desafío a los valores occidentales y cristianos.

Esta reacción, que iba de lo político a lo cultural y de ahí a los ámbitos más privados, encontró amplio eco en la sociedad, revelando que los avances de la modernización no eran tales. Era alimentada desde los sectores más tradicionales de la Iglesia, de gran predicamento entre militares y empresarios. Para el catolicismo integrista, el cuestionamiento de los valores sustantivos de la sociedad -la familia, la tradición, la propiedad- arrancaba con la Revolución Francesa -cuando no de la Reforma-, y suponía una condena del mundo moderno y en particular de la democracia liberal, así como una reivindicación de la sociedad organicista, donde los auténticos intereses sociales estuvieran directamente representados a través de sus corporaciones. Esta postura ultramontana resultaba bien acogida por quienes, por otros motivos, encontraban en el escenario democrático y sus callejones sin salida las raíces del desorden económico y reclamaban un Estado

fuerte, con capacidad para ordenar la vida económica, disciplinar a sus actores y superar los bloqueos para una alternativa eficiente. Todos reclamaban más autoridad y orden, unos con tradición y otros con eficacia.

En torno de esta idea, divulgada desde los más diversos ámbitos, empezó un rápido aglutinamiento de fuerzas que, como se advertía, habían tomado la restauración constitucional como un interludio que permitiera retomar lo que había empezado a esbozarse en 1962. El gobierno de Illia fue condenado por ineficiente por *Primera Plana*, vocero de este grupo, ya en septiembre de 1963, un mes antes de que el nuevo presidente asumiera, y desde entonces la propaganda se ensañó con él. Objetivos distintos pero no contradictorios -la eficiencia, el orden, la modernización y hasta el “destino de grandeza”- confluían en la crítica al gobierno y en una propuesta definida, de manera algo vaga como corresponde a una propuesta política, como el “cambio de estructuras” que se entendía se refería a las políticas. Esta idea fue desarrollada en forma sistemática por un elenco de propagandistas, muchos de ellos expresamente contratados con tal fin, dedicados a desprestigiar al gobierno y al sistema político en general, y a exaltar la figura de Onganía -quien pasó a retiro a fines de 1965-, modelo de eficiencia pero, sobre todo, “última alternativa de orden y autoridad”, como escribía Mariano Grondona en *Primera Plana*. Durante los seis meses finales del gobierno de Illia se tenía la impresión de que buena parte del país -que “estaba en el golpe”- emprendía, sin disimulo alguno, con paciencia y con confianza, el camino que llevaría a la redención. Quienes no participaban de esa fe parecían en cambio compartir el diagnóstico, a juzgar por sus mínimos intentos para defender el sistema institucional que se derrumbaba. El 28 de junio de 1966 los comandantes en jefe depusieron a Illia y entregaron la presidencia al general Onganía. Con la caída de la

democracia limitada terminó el empate, las opciones se definieron y los conflictos de la sociedad, hasta entonces disimulados, pudieron desplegarse plenamente.

## VI. *Dependencia o liberación, 1966-1976*

### EL ENSAYO AUTORITARIO

Un amplio consenso acompañó al golpe del 28 de junio de 1966: los grandes sectores empresarios y también los medianos y pequeños, la mayoría de los partidos políticos -con excepción de los radicales, los socialistas y los comunistas- y hasta muchos grupos de extrema izquierda, satisfechos del fin de la democracia “burguesa”. Perón abrió una carta de crédito, aunque recomendó “desensillar hasta que aclare”, los políticos peronistas fueron algo más explícitos y los sindicalistas se mostraron francamente esperanzados y concurrieron a la asunción del nuevo presidente, especulando con la persistencia del tradicional espacio para la negociación y la presión, y quizá con las posibles coincidencias con un militar que -como aquel otro- ponía el acento en el orden, la unidad, un cierto paternalismo y un definido anticomunismo.

Este crédito amplio y variado tenía que ver con la indefinición inicial entre las diversas tendencias que coexistían en el gobierno. El estado mayor de las grandes empresas -el *establishment* económico- tenía interlocutores directos en muchos jefes militares. Otros -sobre todo los que rodeaban al general Onganía- se nutrían en cambio de una concepción mucho más tradicional, derivada en

parte del viejo nacionalismo, pero sobre todo de las doctrinas corporativistas u organicistas que se estaban abriendo paso entre la nueva derecha. Las contradicciones profundas entre corporativistas y liberales (que ni creían en las libertades individuales ni en el liberalismo económico ortodoxo) se disimulaban en una red de contactos sociales e ideas mezcladas, tejidas en la Escuela de Economía de la Universidad Católica, el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador o en los cursillos de cristiandad que la Iglesia -lanzada a la conquista de los grupos dirigentes y hábil para disimular las diferencias- organizaba para militares, jóvenes empresarios o “tecnócratas de sacristía”.

Así, por el momento primaron las coincidencias. Era necesario reorganizar el Estado, hacerlo fuerte, con autoridad y recursos, y controlable desde su cima. Para unos, era la condición de un reordenamiento económico que usara las tradicionales herramientas keynesianas para romper los bloqueos del crecimiento. Para otros, era la condición de un reordenamiento de la sociedad, de sus maneras de organización y representación, que liquidara las formas políticas del liberalismo, juzgadas nefastas, y creara las bases para otras, naturales, orgánicas y jerárquicas.

La primera fase del nuevo gobierno se caracterizó por un “*shock* autoritario”. Se proclamó el comienzo de una etapa revolucionaria, y a la Constitución se le adosó un Estatuto de la Revolución Argentina, por el cual juró el general Juan Carlos Onganía, presidente designado por la Junta de Comandantes, que se mantuvo en el poder hasta junio de 1970. Se disolvió el Parlamento -el presidente concentró en sus manos los dos poderes- y también los partidos políticos, cuyos bienes fueron confiscados y vendidos, para confirmar lo irreversible de la clausura de la vida política. Los militares mismos fueron cuidadosamente apartados de las decisiones políticas, aunque en cuestiones de seguridad se

institucionalizó la representación de las armas por la vía de sus comandantes. Los ministerios fueron reducidos a cinco, y se creó una suerte de Estado Mayor de la Presidencia, integrado por los Consejos de Seguridad, Desarrollo Económico y Ciencia y Técnica, pues en la nueva concepción el planeamiento económico y la investigación científica se consideraban insumos de la seguridad nacional.

Unificadas las decisiones, se comenzó a encorsetar a la sociedad. La represión del comunismo -uno de los temas que unía a todos los sectores golpistas- se extendió a todas aquellas expresiones del pensamiento crítico, de disidencia o hasta de diferencia. El blanco principal fue la universidad, que era vista como el lugar típico de la infiltración, la cuna del comunismo, el lugar de propagación de todo tipo de doctrinas disolventes y el foco del desorden, pues se consideraba que las manifestaciones en reclamo de mayor presupuesto eran un caso de gimnasia subversiva. Las universidades fueron intervenidas y se acabó con su autonomía académica. El 29 de julio de 1966, en la “noche de los bastones largos”, la policía irrumpió en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires y apaleó a alumnos y profesores. A este impromptu, grave, simbólico y premonitorio, siguió un movimiento importante de renunciadas de docentes. Muchos de ellos continuaron con sus trabajos en el exterior y otros procuraron trabajosamente reconstruir, de manera subterránea, las redes intelectuales y académicas, por lo general en espacios recoletos, que alguien comparó con las catacumbas. Mientras tanto en las universidades reaparecieron los grupos tradicionalistas, clericales y autoritarios que habían predominado antes de 1955.

La censura se extendió a las manifestaciones más diversas de las nuevas costumbres, como las minifaldas o el pelo largo, expresión de los males que, según la Iglesia, eran la antesala del comunismo: el



amor libre, la pornografía, el divorcio. Al igual que en el caso de la universidad, venía a descubrirse que amplias capas de la sociedad coincidían con el diagnóstico de los militares o de la Iglesia acerca de los peligros de la modernización intelectual y con la necesidad de usar la autoridad para extirpar los males.

Los gestos de autoridad se repitieron en ámbitos elegidos arbitrariamente, donde más visible era la generosidad del Estado, o su debilidad frente a las presiones corporativas. Antes de que se hubiera definido una política económica, se procedió a reducir de manera drástica al personal en la administración pública y en algunas empresas del Estado, como los ferrocarriles, y se realizó una sustancial modificación de las condiciones de trabajo en los puertos, para reducir los costos. Otra medida espectacular fue el cierre de la mayoría de los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, que venían siendo ampliamente subsidiados, con el propósito de racionalizar la producción. En todos los casos la protesta sindical, que fue intensa, resultó acallada con violencia, y si bien no se derogó la ley de asociaciones profesionales -se trataba del punto principal de la disputa entre corporativistas y liberales-, se sancionó una de arbitraje obligatorio, que condicionaba la posibilidad de iniciar huelgas. Poco quedaba de las esperanzas de los sindicalistas, rudamente golpeados por la política autoritaria. En febrero de 1967 lanzaron un Plan de Acción, que recordaba el Plan de Lucha montado contra Illia. Pero en la ocasión tropezaron con una respuesta muy fuerte: despidos masivos, retiros de personería sindical, intervenciones a los sindicatos y el uso de todos los resortes que la ley le daba al Estado para controlar al gremialismo díscolo. El paro tuvo por otra parte escasa repercusión y la Confederación General del Trabajo (CGT) debió reconocer su derrota total y suspender las medidas.

El gobierno había encontrado la fórmula política adecuada para

operar la gran reestructuración de la sociedad y la economía. Con la clausura de la escena política y la corporativa, había puesto fin a la puja sectorial, dejando descolocado al sindicalismo vanderista, protagonista principal de ambas escenas, y hasta al propio Perón, que se tomó unas vacaciones políticas. Acallado cualquier ámbito de expresión de las tensiones de la sociedad, y aun de las mismas opiniones, podía diseñar sus políticas con tranquilidad, sin urgencias -la revolución no tiene plazos, se decía- y con un instrumento estatal poderoso en sus manos.

Pero en los seis primeros meses, y más allá de aquellas acciones espectaculares, no se había adoptado un rumbo claro en materia económica pues el equipo designado -de orientación vagamente social cristiana- estaba lejos de conformar al *establishment*. El conflicto se resolvió en diciembre de 1966 en favor de los llamados liberales. El general más afín a ellos, Julio Alsogaray -hermano de Alvaro- fue designado comandante en jefe del Ejército, y Adalberto Krieger Vasena, ministro de Economía y Trabajo. Se trataba de un economista surgido del riñón mismo de los grandes grupos empresarios, con excelentes conexiones con los centros financieros internacionales y de capacidad técnica reconocida. Krieger ocupó el centro del gobierno -su influencia se extendía a los ministerios de Obras Públicas y de Relaciones Exteriores-, pero debió seguir enfrentándose con los grupos corporativistas, que se concentraron en el Ministerio de Interior -donde se manejaba la educación, tema clave para la Iglesia- y la Secretaría General de la Presidencia.

El plan de Krieger Vasena, lanzado en marzo de 1967, coincidiendo con la debacle de la CGT, apuntaba en primer término a superar la crisis cíclica -menos aguda que la de 1962-1963- y a lograr una estabilización prolongada que eliminara una de las causas de la puja sectorial. Más a largo plazo, se proponía racionalizar el funcionamiento de la economía toda y facilitar así el

desempeño de las empresas más eficientes, cuya imposición sobre el conjunto acabaría definitivamente, en este terreno, con empates y bloqueos.

Contaba para ello con las poderosas herramientas de un Estado perfeccionado en sus orientaciones intervencionistas. En el caso de la inflación se recurrió a la autoridad estatal para regular las grandes variables, asegurar un período prolongado de estabilidad y desalentar las expectativas inflacionarias. Sometidos los sindicatos, se congelaron los salarios por dos años, luego de un módico aumento, y se suspendieron las negociaciones colectivas. También se congelaron tarifas de servicios públicos y combustibles, y se estableció un acuerdo de precios con las empresas líderes. El déficit fiscal se redujo con las racionalizaciones de personal y una recaudación más estricta, pero sobre todo porque se estableció una fuerte devaluación del 40% y una retención similar sobre las exportaciones agropecuarias. Con esta medida, la más importante en lo inmediato, se logró a la vez arreglar las cuentas del Estado, evitar el alza de los alimentos, impedir que la devaluación fuera aprovechada por los sectores rurales y asegurar un período prolongado de estabilidad cambiaria, reforzado por préstamos del Fondo Monetario y una importante corriente de inversiones de corto plazo. Todo ello permitió establecer el mercado libre de cambios. En lo inmediato, los éxitos de esta política de estabilización fueron notables: a mediados de 1969 la inflación se había reducido drásticamente, aunque seguía siendo elevada para los niveles de los países centrales, y las cuentas del Estado estaban equilibradas, lo mismo que la balanza de pagos.

Otros poderosos instrumentos de intervención estatal fueron utilizados para mantener el nivel de la actividad económica y estimular a los sectores juzgados más eficientes. No hubo restricción monetaria ni crediticia. Las inversiones del Estado fueron

considerables, particularmente en obras públicas: la represa hidroeléctrica de El Chocón, que debía solucionar el fuerte déficit energético, puentes sobre el Paraná, caminos y accesos a la Capital, a lo que se sumó un impulso similar de la construcción privada. Las exportaciones no tradicionales fueron beneficiadas con reintegros de impuestos a insumos importados. Se estimuló la eficiencia general de la economía mediante una reducción, ciertamente selectiva, de los aranceles y la eliminación de subsidios a economías regionales, como la azucarera tucumana o la algodонера chaqueña. También aquí los éxitos globales fueron notables: creció el producto bruto, sosteniendo la tendencia de los años anteriores, la desocupación fue en general baja -aunque las reestructuraciones crearon bolsones de alto desempleo-, los salarios no cayeron notablemente y la inversión fue en general alta, aunque concentrada en obras públicas. No hubo un movimiento inversor privado sostenido, de modo que hacia 1969 el crecimiento parecía alcanzar su techo.

El sector más concentrado -predominantemente extranjero- resultó el mayor beneficiario de esta política, que además de estabilizar, apuntaba a reestructurar de manera profunda el mundo empresario y a consolidar de modo definitivo los cambios esbozados desde 1955. Muchas de las empresas instaladas en la época de Frondizi empezaron por entonces a producir a pleno, pero además hubo compras de empresas nacionales por parte de extranjeras -se notó en bancos o tabacaleras- de manera que la desnacionalización de la economía se hizo más manifiesta. Sin renunciar a las ventajas de los regímenes de promoción con que se instalaron, estas empresas se beneficiaron con la situación de estabilidad, en la cual podían hacer pesar sus ventajas en organización, planeamiento y racionalidad. Las grandes obras públicas realizadas en esta etapa en general solucionaban sus

problemas de transporte o energía, a la vez que creaban oportunidades atractivas para las que empezaban a operar como contratistas del Estado, un rubro llamado a crecer considerablemente.

En cambio, la lista de perjudicados fue amplia. A la cabeza estaban los sectores rurales; si bien se los estimuló a la modernización y tecnificación -a eso apuntaba el temido impuesto a la “renta potencial”-, se sintieron perjudicados por lo que consideraban un despojo: las fuertes retenciones a la exportación. Los sectores empresarios nacionales -que hacían oír su voz a través de la Confederación General Económica (CGE)- se quejaban de falta de protección y se lamentaban de la desnacionalización. Economías provinciales enteras -Tucumán, Chaco, Misiones- habían recibido verdaderos mazazos al suprimirse protecciones tradicionales. La lista de maltrechos se completaba con amplios sectores medios, perjudicados de formas varias, desde la liberación de los alquileres urbanos hasta el avance de los supermercados en la comercialización minorista, y naturalmente con los trabajadores.

La nueva política modificaba en forma profunda los equilibrios -cambiantes pero estables- de la etapa del empate, y volcaba la balanza en favor de los grandes empresarios. La utilización del más tradicional de los instrumentos de política económica -la transferencia de ingresos del sector rural tradicional al sector urbano- operaba de un modo nuevo: en lugar de alimentar a éste por la vía del mayor consumo de los trabajadores y la expansión del mercado interno -clásica en las alianzas distribucionistas entre empresarios y trabajadores-, lo hacía por la expansión de la demanda autónoma: inversiones, exportaciones no tradicionales y un avance en la sustitución de importaciones. Como ha señalado Adolfo Canitrot, se trataba del proyecto propio y específico de la gran burguesía, que sólo en estas circunstancias sociales y políticas

podía ser propuesto. Sostenido por quienes gustaban de llamarse liberales, era en realidad una política que si bien achicaba las funciones del Estado benefactor, conservaba y aun expandía las del Estado intervencionista. Ni los empresarios querían renunciar a esa poderosa palanca, ni los militares hubieran aceptado el achique de aquellas partes del Estado con las que más fácilmente se identificaban: las empresas militares orientadas de una u otra manera a la defensa y las mismas empresas del Estado, que con frecuencia eran llamados a administrar. En estos años la expansión del Estado parecía perfectamente funcional con la reestructuración del capitalismo, pero es probable que no se ocultaran a sus beneficiarios los peligros potenciales de conservar activa una herramienta tan poderosa.

A lo largo de 1968, empezaron a notarse los primeros indicios del fin de la *pax romana*. En marzo, un grupo de sindicalistas contestatarios, encabezados por Raimundo Ongaro, dirigente gráfico de orientación social cristiana, ganó la conducción de la CGT, aunque de inmediato los dirigentes más tradicionales la dividieron. Pero a lo largo de 1968 la CGT de los Argentinos -en torno de la cual se reunieron activistas de todo tipo- encabezó un movimiento de protesta que el gobierno pudo controlar combinando amenazas y ofrecimientos. Esta emergencia contestataria reunió a dos grupos de dirigentes hasta ese momento enfrentados: el tradicional núcleo vanderista, carente de espacio para su política, y los llamados “participacionistas”, dispuestos a aceptar las reglas del juego impuestas por el régimen y a asumir su función de expresión corporativa, ordenada y despolitizada, del sector laboral de la comunidad. En ellos centraban sus ilusiones quienes rodeaban a Onganía: concluida la reestructuración económica -pensaban-, era posible iniciar el “tiempo social”, con el apoyo de una CGT unida y domesticada. Esta corriente, con

representación en el Ejército, pero fuerte sobre todo por su cercanía a la presidencia, se sumó a otra alimentada por las protestas cada vez más generales de la sociedad. Los sectores rurales eran fácilmente escuchados por los jefes militares, y también los sectores del empresariado nacional, capaces de tocar una fibra todavía sensible en ellos: frente a la política económica imperante, hay otra alternativa, decían; es posible un desarrollo más nacional, algo más popular y más justo.

Todas estas voces, poco orquestadas todavía, pusieron en tensión la relación entre el presidente y su ministro de Economía. A mediados de año, Onganía relevó a los tres comandantes y reemplazó a Julio Alsogaray -conspicuo liberal- por Alejandro Lanusse, por el momento menos definido. Las voces del *establishment* salieron a defender a Krieger Vasena, comenzaron a quejarse del excesivo autoritarismo de Onganía, de sus veleidades corporativistas y autoritarias, y empezaron a pensar en una salida política, para la que se ofrecía el general Aramburu y hacía su aporte el nuevo delegado personal de Perón, Jorge Daniel Paladino. Cuando en mayo de 1969 estalló el breve pero poderoso movimiento de protesta -el Cordobazo-, el único capital de Onganía, el mito del orden, se desvaneció.

#### LA PRIMAVERA DE LOS PUEBLOS

El estallido ocurrido en Córdoba en mayo de 1969 vino precedido de una ola de protestas estudiantiles en diversas universidades de provincias -ya en 1966, en Córdoba, había muerto un estudiante, Santiago Pampillón- y de una fuerte agitación sindical en Córdoba, centro industrial donde se concentraban las principales fábricas de automotores. Activismo estudiantil y obrero -componentes principales de la ola de agitación que se iniciaba- se conjugaron el

29 de mayo de 1969. La CGT local realizó una huelga general y grupos de estudiantes y obreros -con aportes masivos de las fábricas automotrices- ganaron el centro de la ciudad, donde se sumó mucha otra gente. La fortísima represión policial generó un violento enfrentamiento: hubo barricadas, hogueras para combatir los gases lacrimógenos y asaltos a negocios, aunque no pillaje. La multitud, que controló varias horas el casco central de la ciudad, no tenía consignas ni organizadores -sindicatos, partidos o centros estudiantiles fueron desbordados por la acción-, pero se comportó con rara eficacia, dispersándose y reagrupándose. Finalmente intervino el Ejército, con llamativa demora, y recuperó el control, salvo en algunos reductos -como el barrio universitario del Clínicas- donde francotiradores jaquearon a los militares un día más, mientras los manifestantes reaparecían en los suburbios, armando barricadas o asaltando comisarías. Lentamente, el 31 de mayo se restableció el orden. Habían muerto entre veinte y treinta personas, unas quinientas fueron heridas y otras trescientas detenidas. Consejos de Guerra condenaron a los principales dirigentes sindicales -como Agustín Tosco- en quienes se hizo caer la responsabilidad.

Como acción de masas, el Cordobazo sólo puede ser comparado con la Semana Trágica de 1919, o con el 17 de octubre, con la diferencia de que en este último caso la policía apoyó y custodió a los trabajadores. Como éste, fue el episodio fundador de una ola de movilización social que se prolongó hasta 1975. Por eso, su valor simbólico fue enorme, aunque de él se hicieron lecturas diversas, desde el poder, desde las estructuras sindicales o políticas existentes o desde la perspectiva de quienes, de una u otra manera, se identificaban con la movilización popular y extraían sus enseñanzas de la jornada. Pero cualquiera fuera la interpretación, un punto era indudable: el enemigo de la gente que masivamente salió a la calle



era el poder autoritario, detrás del cual se adivinaba la presencia multiforme del capital.

La ola de movilización social que inauguró el Cordobazo se expresó de maneras diversas. Una de ellas fue un nuevo activismo sindical, que se manifestó primero en la zona de Rosario o sobre todo en Córdoba, donde se destacaban las plantas de las grandes empresas establecidas luego de 1958, en especial las automotrices. Con obreros estables, especializados y relativamente bien pagos, los conflictos no se limitaron a lo salarial -donde se agotaba el sindicalismo tradicional- y se extendieron a las condiciones de trabajo, los ritmos, los sistemas de incentivos, las clasificaciones y categorías. Estas cuestiones, vitales para las grandes empresas, lo eran sobre todo para las automotrices, que después de una instalación masiva e improvisada debían afrontar, desde 1965, un duro proceso de racionalización, de modo que los motivos de conflicto eran permanentes. Esas mismas empresas -empeñadas en debilitar el control sindical- habían logrado autorización del gobierno para negociar particularmente sus convenios de trabajo -eludiendo el convenio nacional- e incluso para crear sindicatos por planta, como ocurrió con las de Fiat. Al principio esto debilitó a las organizaciones sindicales, pero a la larga permitió que surgieran conducciones con orientaciones marcadamente diferentes de las del sindicalismo nacional, tanto en sus objetivos como en sus métodos. Mientras aquél se limitaba a negociar los salarios y afirmaba su control en la desmovilización, la cooptación y el matonismo, los nuevos dirigentes gremiales ponían el acento en la honestidad, la democracia interna y la atención de los problemas de la planta.

Una movilización que escapaba a los límites y controles de las burocracias gremiales y un tipo de demandas novedoso fueron configurando un sindicalismo singular, circunscripto al principio a los centros industriales nuevos, pero extendido, hacia 1972, a las

zonas más tradicionales del Gran Buenos Aires, hasta entonces mejor controladas por el aparato gremial puesto en discusión. En ese ámbito era posible pasar de las reivindicaciones concretas a un cuestionamiento más amplio de las relaciones sociales y de la misma propiedad. Los sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de Concord (SITRAC) y del Sindicato de Trabajadores de Materfer (SITRAM) -los sindicatos de la automotriz Fiat- o del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), el gremio de los mecánicos, en Córdoba, fueron espontáneamente “clasistas” antes de que el cúmulo de militantes de izquierda, de las tendencias más variadas, que se congregó en torno de ellos le diera a esta acción una definición más extensa. Pero además, era una acción gremial fuertemente transgresora, al borde de la “violencia”, que incluía ocupaciones de plantas y toma de rehenes, y con una gran capacidad para movilizar al resto de la sociedad, sobre todo en las ciudades, donde la fábrica ocupaba un lugar muy visible, y cuando en un paro activo los trabajadores salían a la calle convocando a la solidaridad.

Por entonces, ya muchos salían a la calle. Poco después del Cordobazo hubo episodios similares en Rosario -el Rosariazo- y en Cipolletti, en la zona frutícola del Valle del Río Negro; los episodios se repitieron luego en Córdoba, en 1971, en Neuquén y en General Roca, y adquirieron una magnitud notable en Mendoza, en julio de 1972. La misma agitación se advertía en las zonas rurales, sobre todo en las no pampeanas, como el Chaco, Misiones o Formosa, donde arrendatarios y colonos, presionados por los desalojos o los bajos precios del algodón o la yerba, se organizaban en las Ligas Agrarias. Las explosiones urbanas se prolongaron en manifestaciones callejeras, a las que se sumaban los estudiantes universitarios en permanente estado de ebullición, y en acciones más cotidianas de reclamo en barrios o villas de emergencia. Estas

formas originales de protesta -que recordaban los “furores” o los motines preindustriales- eran desencadenadas por algún episodio ocasional: un impuesto, un aumento de tarifas, un funcionario particularmente desafortunado, pero expresaban un descontento profundo y un conjunto de demandas que, puesto que el poder autoritario había cortado los canales de expresión establecidos, se manifestaban en espacios sociales recónditos, en villas, barrios o pequeñas ciudades, y emergían poniendo en movimiento extensas y difusas redes de solidaridad. Surgidas de cuestiones que hacían a la vida cotidiana antes que laborales -la vivienda, el agua, la salud-, movilizaban a sectores mucho más vastos que el de los obreros sindicalizados: desde trabajadores ocasionales, no agremiados y desprotegidos, hasta sectores medios cuya participación era uno de los datos más novedosos, y que se manifestaba también en las huelgas de maestros y profesores, empleados públicos, funcionarios judiciales o en los *lock out* de pequeños comerciantes e industriales.

Se trataba de un coro múltiple, heterogéneo pero unitario, regido por una lógica de la agregación, al que se sumaban las voces de otros intereses heridos, como los grandes productores rurales o los sectores nacionales del empresariado. Unos y otros se legitimaban de manera recíproca y conformaron un imaginario social sorprendente, una verdadera “primavera de los pueblos”, que fue creciendo y cobrando confianza -hasta madurar plenamente en 1973- a medida que descubría la debilidad de su adversario, por entonces incapaz de encontrar la respuesta adecuada. Según una visión común, que progresivamente iba definiendo sus perfiles y simplificando los matices, todos los males de la sociedad se concentraban en un punto: el poder autoritario y los grupos minoritarios que lo apoyaban, responsables directos y voluntarios de todas y cada una de las formas de opresión, explotación y violencia de la sociedad. Frente a ellos se alzaba el pueblo,

hermandad solidaria y sin fisuras, que se ponía en movimiento para derrotarlos y resolver todos los males, aun los más profundos, pues la realidad toda parecía ser transparente y lista para ser transformada por hombres y mujeres impulsados a transitar el camino entre las reivindicaciones inmediatas y la imaginación de mundos distintos. Cuáles eran estos mundos y cómo se llegaba a ellos eran cuestiones que empezaban a discutirse en otros ámbitos.

No era difícil encontrar por entonces en todo el mundo señales confirmatorias de esa primavera. Los vastos acuerdos sociales que habían presidido el largo ciclo de prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial estaban agotándose, como se advertía en la ola de descontento que recorría a la sociedad, y sobre todo en la rebelión de su grupo más sensible, los estudiantes. Se expresó en Praga, México o Berkeley, y culminó en París en mayo de 1968, clamando contra el autoritarismo y por el poder de la imaginación. La expresión más notoria del poder autoritario -el imperialismo- trastabillaba visiblemente frente a la ola de movimientos emancipatorios: la sorprendente capacidad de resistencia del pueblo de Vietnam mostró la imagen derrotada de un gigante que, además, debía lidiar en su propio frente interno con estudiantes, negros y una sociedad entera que reclamaba sus derechos. Si la Unión Soviética -develadora de la primavera de Praga- había dejado hacía ya mucho tiempo de encarnar una utopía, China y su Revolución Cultural proclamaban la posibilidad de otro comunismo, a la vez nacional y antiautoritario. La imagen del presidente Mao, así como la de Fidel Castro, oscilaban entre el mundo socialista y un Tercer Mundo -cuyos representantes se congregaron en 1965 en la Conferencia Tricontinental de La Habana- cada vez más volcado a la izquierda, en el que distintas expresiones nacionales del socialismo podían encontrar un campo común de reconocimiento y acción.

En América Latina, donde los prospectos de la Alianza para el Progreso y el apoyo a las democracias habían quedado definitivamente archivados, los campos estaban bien delimitados: si para el poder autoritario el desarrollo era un fruto de la seguridad nacional, para quienes lo enfrentaban la única alternativa a la dependencia era la revolución, que conduciría a la liberación. Cuba constituía un ejemplo fundamental, no tanto por la propia experiencia -de la que se conocía poco- como por su papel activo en lo que sus enemigos llamaban la exportación de la revolución. La acción del Che Guevara en Bolivia mostró las posibilidades y límites del “foco” revolucionario, pero sobre todo su muerte -una imagen que recorrió el mundo- dio origen al símbolo más fuerte de quienes luchaban, de una u otra manera, por la liberación. En el mismo frente, unidos por el enemigo, se alineaban las guerrillas urbanas del Brasil o del Uruguay -los románticos Tupamaros-, los partidos marxistas chilenos que llevaron a Salvador Allende a la presidencia por la vía electoral, o militares nacionalistas y populistas como el boliviano Torres, el panameño Torrijos o el peruano Velasco Alvarado. Hasta la Iglesia, tradicional baluarte de los sectores oligárquicos, se sumaba, al menos en parte, a esta primavera. Al calor de los cambios institucionales introducidos primero por Juan XXIII, y por el Concilio Vaticano II después, parte de la Iglesia latinoamericana hizo una lectura singular de sus propuestas. En 1967 los obispos del Tercer Mundo, encabezados por el brasileño Hélder Câmara, proclamaron su preocupación prioritaria por los pobres -reales, y no sólo de espíritu-, así como la necesidad de comprometerse en forma activa en la reforma social y asumir las consecuencias de ese compromiso. Esta línea quedó parcialmente legitimada cuando en 1968 se reunió en Medellín, con la presencia del Papa, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Una “teología de la liberación” adecuó el tradicional mensaje de la Iglesia a los

conflictos de la hora, y la afirmación de que la violencia “de abajo” era consecuencia de la violencia “de arriba” autorizó a franquear el límite, cada vez más estrecho, entre la denuncia y la acción. Ése era el camino que ya había seguido el sacerdote y guerrillero colombiano Camilo Torres, muerto en 1966, figura tan emblemática como la del Che Guevara.

Esta tendencia tuvo rápidamente expresión en la Argentina. Desde 1968, los religiosos que se reunieron en el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, y los laicos que lo acompañaban, militaron en las zonas más pobres, particularmente las villas de emergencia, promovieron la formación de organizaciones solidarias e impulsaron reclamos y acciones de protesta, que incluían huelgas de hambre. Su lenguaje evangélico fue haciéndose rápidamente político. La violencia de abajo -decían- se legitimaba por la injusticia social, que también era una forma de violencia. La solidaridad con el pueblo -cuyo rostro, a diferencia de los “clasistas”, veían más bien en los marginales desprotegidos que en los trabajadores industriales sindicalizados- llevaba de manera inevitable a identificarse con lo que era su creencia básica: el peronismo. Los sacerdotes tercermundistas facilitaron la incorporación a la política y a la militancia de vastos contingentes de jóvenes, educados en los colegios religiosos y formados inicialmente en el nacionalismo católico. Asumieron la solidaridad y el compromiso con los pobres, y también el peronismo, y aunque entraron en contacto con ideas provenientes de la izquierda, continuando la tendencia al “diálogo entre cristianos y marxistas”, conservaron una fuerte impronta de su matriz ideológica original.

Por ésa y otras vías, contingentes de jóvenes se incorporaron rápidamente a un activismo cuyo perfil resultaba irreconocible para muchos. La tradicional política universitaria cambió de forma y de sentido luego de que el poder autoritario destruyó la “isla

democrática” que se había construido desde 1955, en la que era posible combinar la excelencia académica con la militancia, y el compromiso con algún distanciamiento crítico frente a las opciones concretas. Desde antes de 1966, ambos términos se hallaban en fuerte tensión, pero fue la represión la que tronchó lo mejor de ese pensamiento crítico o lo lanzó a una actividad totalmente subordinada a la política -una ciencia que diera puntualmente cuenta de la “dependencia” y contribuyera de modo directo a la liberación-, y zambulló de manera directa en la acción a los disidentes, al punto de que las universidades, cada vez más descalificadas desde la perspectiva académica, se fueron convirtiendo en centros de agitación y de reclutamiento.

Para muchos, y muy especialmente para los jóvenes sin experiencias políticas anteriores, ejerció una atracción muy fuerte el peronismo, proscripto y resistente, donde encontraban el mejor espacio para la contestación. Del peronismo pasado y presente -y del propio Perón- podían derivarse muchas imágenes, y los nuevos militantes también construyeron una. En su exilio de Madrid, y algo apartado de los problemas cotidianos, el líder había ido actualizando su discurso, incluyendo temas varios que iban desde De Gaulle y el europeísmo hasta el tercermundismo -que asoció con su tercera posición-, la dependencia, la liberación y también las cuestiones ecológicas o alimentarias, que preocuparon al Club de Roma. Mientras Perón iba sintonizando, de ese cúmulo de elementos, los que mejor cuadraban a su papel de jefe de iglesia, obligado a ser uno para muchos, quienes en la Argentina lo proclamaban su líder seleccionaban aquellos elementos que mejor se adaptaban a su propia percepción de la realidad. Silvia Sigal y Elíseo Verón encontraron en esta capacidad para la “lectura estratégica” una explicación del espectacular crecimiento de quienes la cultivaron, y también la raíz del hondo drama que siguió.

En sus nuevos portadores, y a falta de quien legitimara una única ortodoxia, el peronismo resultó permeable a múltiples discursos, provenientes del catolicismo y del nacionalismo, del revisionismo histórico y también de la izquierda, sobre todo en la medida en que ésta iba resolviendo sus perplejidades ante lo que John William Cooke llamó el “hecho maldito”. Definida como se vio por la vía revolucionaria, y admitido el hecho de que los trabajadores -elemento inexcusable para la construcción del socialismo- eran irrevocablemente peronistas, buena parte de las corrientes de izquierda aceptó profesar la religión, algunos con sinceridad y otros con reservas de conciencia, para fusionarse con el “pueblo peronista”, esperando ser reconocidos como su vanguardia. No fueron todos: la experiencia del Cordobazo vitalizó a las corrientes que, en una perspectiva más clásica, confiaban en las posibilidades de la acción de las masas y privilegiaron “la clase” por sobre “el pueblo”.

Los que optaron por el peronismo terminaron de redondear su revisión ideológica y de encontrar el lugar que ese movimiento ocupaba en el gran proceso de construcción del socialismo. Algunos que provenían del marxismo -como Jorge Abelardo Ramos y Rodolfo Puiggrós- y otros del nacionalismo -como Juan José Hernández Arregui, Arturo Jauretche o José María Rosa- terminaron por crear -al menos a los ojos de quienes los leían- una vía intermedia en que las exigencias del socialismo se complementaban con las de la liberación nacional, un tema al que tanto aportaban el viejo nacionalismo como el leninismo. Al igual que la política, la historia se leyó en clave maniquea, y se buscó descifrar, tras el ocultamiento de la “historia oficial”, el recuerdo soterrado de las luchas populares por la nación y la liberación, en las que el peronismo prolongaba la acción de las montoneras federales, Rosas e Yrigoyen. En otras versiones, la “línea” incorporaba actores



diversos: unos ponían al general Roca y otros a los anarquistas o socialistas. Pero todos compartían la convicción -expresada con fuerza y fortuna por el revisionismo histórico- de que había una línea, que separaba la historia en dos bandos inconciliables y eternamente enfrentados, que culminaba con el enfrentamiento entre el poder autoritario y el pueblo peronista.

El peronismo había sido en la posguerra el ámbito para una primera emergencia del pueblo -en el contexto de la industrialización, la burguesía nacional, el Estado nacionalista- y lo sería para una segunda emergencia, que se preparaba, donde el contexto llevaría a redefinir las banderas históricas hacia la emancipación del imperialismo y al socialismo. Podía discutirse -y así ocurría- sobre quiénes eran los aliados del pueblo, integrantes del frente nacional, y aun sobre qué cosa era ese pueblo, en el que algunos encontraban a la clase obrera segura y orgullosa, y otros a los miserables oprimidos, necesitados de una guía paternal y autoritaria. En el ámbito de la izquierda y del activismo, urgido por explicar el fenómeno presente de la movilización popular masiva, estas discusiones fueron intensas. Pero por sobre ellas privó la exigencia de la acción, que en el nuevo contexto -tan distinto en ese sentido al clásico de la izquierda- tenía total prioridad sobre la reflexión.

La revolución era posible. Así lo mostraban Cuba, el Cordobazo y la movilización social, tan intensa como carente de dirección y programa. Encontrarlos en la acción misma fue la pretensión del nuevo activismo. La alternativa democrática -desprestigiada para los viejos militantes y carente de sentido para los más jóvenes- estuvo totalmente ausente de las discusiones. La izquierda ofreció una lectura clásica de la movilización y sus posibilidades, a través del “clasismo” sindical, fuerte sobre todo en Córdoba. En 1971, SITRAC y SITRAM propusieron un programa que debía reunir a toda

la izquierda, convertida en vanguardia del proletariado más consciente, pero descubrieron que los trabajadores no estaban dispuestos a acompañarlos en una propuesta que, cuestionando las relaciones sociales y la propiedad, desbordaba ampliamente los límites reivindicativos de sus reclamos. Al igual que con anarquistas y radicales a principios de siglo, los trabajadores de Córdoba seguían a los clasistas en lo gremial, pero en política continuaban siendo peronistas.

En cambio, los discursos políticos predominantes, que mezclaban elementos del marxismo revolucionario con otros del nacionalismo o el catolicismo tercermundista, se nutrieron en la experiencia de la primavera, potenciaron el imaginario popular y lo reforzaron y legitimaron con referencias teóricas. Aunque cortaran la realidad y la sociedad de distintas maneras, todos ellos la dividían tajantemente en dos campos enfrentados: amigos y enemigos. La clave de la opresión, la injusticia y la entrega se encontraba en el poder, monopolizado por unos pocos -nacionalistas y trotskistas legitimaban esta visión conspirativa-, y así como todo era posible desde el poder, el fin único de la acción política era su captura. La falta de condiciones y de posibilidades reales podía ser suplida con la voluntad, y en primer lugar con la violencia, lo que era abonado desde el leninismo, el guevarismo o el fascismo. Por uno u otro camino, todo llevaba a interpretar la política con la lógica de la guerra, y naturalmente quienes mejor se adecuaron a esta lógica privaron en el debate de los activistas e imprimieron su sello a la movilización popular.

Las primeras organizaciones guerrilleras habían surgido -sin mayor trascendencia- al principio de la década de 1960, al calor de la experiencia cubana, y se reactivaron con la acción de Guevara en Bolivia, pero su verdadero caldo de cultivo fue la experiencia autoritaria y la convicción de que no había alternativas más allá de

la acción armada. Desde 1967 -y en el ámbito de la izquierda o del peronismo- fueron surgiendo distintos grupos: las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Descamisados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), y hacia 1970 las dos que tuvieron más trascendencia: la organización Montoneros, surgida del integrismo católico y nacionalista y devenida peronista, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), vinculado al grupo trotskista del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Su acta oficial de nacimiento a la vida pública fue el secuestro y asesinato del general Aramburu, en mayo de 1970, por obra de Montoneros. Poco después, las FAR “coparon” la pequeña ciudad de Garín, a pocos kilómetros de la Capital, y los Montoneros hicieron lo mismo con La Calera, en Córdoba. Desde entonces, y hasta 1973, los actos de violencia fueron en crecimiento, tanto en número como en espectacularidad. Aunque su sentido no siempre era claro, muchos tenían que ver con el equipamiento de las organizaciones: armas, dinero, material médico. Otros, como los copamientos, eran demostraciones de poder, que desnudaban la impotencia del Estado, y no faltaron acciones de “expropiación” y reparto entre los pobres, al estilo Robin Hood. En muchos casos las acciones procuraban insertarse en los conflictos sociales y profundizarlos, por ejemplo secuestrando a empresarios o a gerentes en medio de una huelga. Lo más espectacular fueron los asesinatos: antes que Aramburu, había muerto Augusto Vandor -aunque sus autores no se revelaron- y luego José Alonso, otro dirigente sindical destacado. En 1972, casi simultáneamente, fueron asesinados un importante empresario italiano y un general de alta graduación.

El caso de Aramburu reúne todas las explicaciones y las significaciones de esta práctica: venganza -o justicia- por los fusilamientos de 1956, caída en un dirigente particularmente odiado

por los peronistas, pero también liquidación *-stricto sensu-* de una alternativa política que los grupos liberales venían preparando ante el desgaste de Onganía. Ciertos contactos entre los dirigentes Montoneros y miembros del equipo de Onganía hicieron pensar en una conspiración desde el poder y llevaron a algunos a reflexionar tempranamente sobre el carácter manipulador de la vía armada.

Entre todas las organizaciones había grandes diferencias teóricas y políticas, pero privaba un espíritu común. Todas aspiraban a transformar la movilización espontánea de la sociedad en un alzamiento generalizado, y todas coincidían en una cultura política que retomaba y potenciaba la de los grupos de izquierda, pero que de alguna manera tomaba la de sus adversarios. La lógica de la exclusión -esa constante de la política en el siglo XX- era llevada hasta sus últimas consecuencias: el enemigo -lacayos del imperialismo, Ejército de ocupación- debía ser aniquilado. Las organizaciones eran la vanguardia de la movilización popular, cuya representación consistía en la acción violenta. La unidad, el orden, la jerarquía y la disciplina eran -igual que en el Ejército, igual que en el cuerpo social imaginado por la Iglesia y los corporativistas- los atributos de la organización armada. La violencia no sólo se justificaba por la del adversario: era glorificada como la partera del orden nuevo. Los atributos del verdadero militante eran el heroísmo y la disposición a una muerte gloriosa y redentora, camino de la verdadera trascendencia, “entre los héroes de la patria amada”. Como ha señalado Juan José Sebreli, no es el Guevara vivo sino su cadáver el faro de quienes, desde orígenes diversos y por distintos caminos, coincidían en vivir a la muerte.

Tan revelador de la cultura política de la sociedad era que un amplio grupo de jóvenes hiciera del asesinato un arma política, como la forma en que el resto de la sociedad lo recibía, con una mezcla de simpatía por la justicia consumada, de satisfacción por

haber golpeado duramente al enemigo o de intriga, en muchos casos, por las verdaderas razones de crímenes que no se terminaban de entender, pero de cuya razonabilidad, ya fuera ética o táctica, nadie dudaba. Esa simpatía general, irreflexiva y boba, como pronto se vería, hizo por el momento que cualquier propuesta de represión sistemática estuviera destinada al fracaso.

Del cúmulo de organizaciones guerrilleras, fue Montoneros la que mejor se adecuó al clima del país, y la que fue absorbiendo a casi todas las otras, con la excepción del ERP. Fueron ellos los que privilegiaron en términos absolutos la acción y los que menos se sentían atados por tradiciones o lealtades políticas previas, lo que les permitió funcionar con plena eficiencia como aparato militar. También triunfaron, dentro del peronismo, en la difícil competencia de la “lectura estratégica” de Perón, ganando espacios para su acción autónoma, y a la vez el reconocimiento del líder, que también había adquirido maestría en el arte de “utilizar sus dos manos”. Eran también, por su formación y tradición, los menos orientados al movimiento obrero y los más propensos a buscar sus apoyos y su legitimación en los amplios sectores marginales cultivados por los sacerdotes tercermundistas. Desde 1971, aprovecharon el clima creado por la salida política y el retorno de Perón, se volcaron a la organización y movilización de éstos y otros sectores en barrios, villas, universidades y, en menor medida, en sindicatos, a través de la Juventud Peronista, que creció notablemente.

#### MILITARES EN RETIRADA

La movilización popular fue identificándose cada vez más con el peronismo y con el propio Perón, que hacia 1971 llegó a ocupar en la política argentina una posición casi tan central como la que tenía

cuando era presidente. Impotentes y desconcertadas, las Fuerzas Armadas fueron advirtiéndole que debían buscar una salida al callejón en que estaban metidas. En retirada, debían negociar sus términos con diversas fuerzas sociales y políticas, y en definitiva con Perón mismo. Pese a que el calvario era inevitable, los caminos posibles eran varios.

A su manera, Onganía inició la búsqueda. En mayo de 1969 su autoridad se resintió tanto por la impotencia frente al desafío social cuanto por las vacilaciones del Ejército para reprimirlo. Sintió también el impacto en el área económica, donde se produjo una apresurada salida de capitales extranjeros y una reaparición de las expectativas de inflación. Onganía intentó sortear las dificultades con modificaciones menores -sacrificó a Krieger Vasena y lo reemplazó por un técnico de menor perfil pero parecida orientación- y una apertura más decidida a “lo social”, en particular con la CGT y sus dirigentes “participacionistas”. Pero el clima había cambiado: los sindicalistas eran menos dóciles y los empresarios manifestaban abiertamente su desconfianza por los escarceos populistas. Un sector hasta entonces sacrificado -los productores rurales- elevó su protesta y mantuvo un duro entredicho con los frigoríficos extranjeros, aparentemente protegidos por el gobierno. Onganía estaba cada vez más aislado de las Fuerzas Armadas, pero se benefició de su indecisión y sus perplejidades. Había grupos que querían probar la vía del nacionalismo, y quizás del populismo, mientras que los liberales dudaban entre una dictadura más extrema o la negociación de la salida política, empresa que se asociaba con el nombre del general Aramburu. El 29 de mayo de 1970, a un año exacto del Cordobazo, Aramburu fue secuestrado y pocos días después se encontró su cadáver. Muchos sospecharon, con algún fundamento, que ciertos círculos que rodeaban al presidente estaban de alguna manera implicados. Lo cierto es que el episodio

despejó las dudas de los militares: a principios de junio de 1970, depusieron a Onganía y designaron a un presidente -mandatario de la Junta de Comandantes, que se reservaba la autoridad para intervenir en las principales cuestiones de Estado-. El designado fue el general Roberto Marcelo Levingston, figura poco conocida y a la sazón ausente del país.

Levingston, que gobernó hasta marzo de 1971, reveló tener ideas propias, muy diferentes de las del general Lanusse, figura dominante en la Junta, y acordes con las del grupo, minoritario pero influyente, de oficiales nacionalistas. Designó ministro de Obras Públicas y luego de Economía a Aldo Ferrer, destacado economista de tendencia cepalina, que había ocupado cargos durante la administración de Frondizi. Ferrer se propuso reeditar la fórmula nacionalista y populista, en los modestos términos posibles luego de las transformaciones de los anteriores diez años. Un ministro de Trabajo de extracción peronista negoció con la CGT y hubo un impulso salarial distribucionista. Se protegió a los sectores nacionales del empresariado, por la vía del crédito y de los contratos de las empresas del Estado. El “compre argentino” y la “argentinización del crédito” sintetizaban esa política, quizá modesta pero original en su contexto. Sus estrategias confiaban en que, en un plazo que estimaban en cuatro o cinco años, se crearían las condiciones para una salida política adecuada y una democracia “auténtica”. Levingston confirmó la caducidad de los “viejos” partidos y alentó la formación de otros “nuevos”, y quizá de un movimiento nacional que asumiera la continuidad de la transformación, para lo que agitó vagas consignas antiimperialistas e intentó atraer a políticos de segunda línea de los partidos tradicionales, junto con dirigentes de fuerzas políticas menores. La aspiración a movilizar al “pueblo” desde el gobierno militar resultaba ingenua, pero de cualquier modo fue el primer

reconocimiento formal de la necesidad de una salida política.

Convocándola a negociar, el gobierno reflató a la alicaída CGT. Los dirigentes sindicales, presionados por demandas sociales crecientes y la inflación que había reaparecido, y estimulados por la reapertura del espacio de presión creado por la debilidad del gobierno, lanzaron en octubre de 1970 un plan de lucha que incluyó tres paros generales, no contestados por el gobierno. Los partidos tradicionales, por su parte, con el aliento del general Lanusse, también reaparecieron en el escenario. A fines de 1970 la mayoría de ellos firmó un documento, La Hora del Pueblo, cuyos artífices fueron Jorge Daniel Paladino, delegado personal de Perón, y Arturo Mor Roig, veterano político radical, y que fue la base de su acción conjunta hasta 1973. Allí se acordaba poner fin a las proscripciones electorales y asegurar, en un futuro gobierno electo de manera democrática, el respeto a las minorías y a las normas constitucionales. Radicales y peronistas deponían las armas que tradicionalmente habían esgrimido y ofrecían a la sociedad la posibilidad de una convivencia política aceptable. El documento incluía también algunas definiciones sobre política económica, moderadamente nacionalistas y distribucionistas, que permitieron el posterior acercamiento tanto de la CGT como de la CGE, las organizaciones sindical y empresaria, que por su parte también acordaron un pacto de garantías mínimas.

El resurgimiento del sindicalismo organizado y de los partidos políticos se debía en parte a la apertura del juego por un gobierno que buscaba su salida, pero fundamentalmente a la emergencia social, que en forma indirecta los revitalizaba y a la vez los convertía en posibles mediadores. Levingston resultó incapaz de manejar el espacio de negociación que se estaba abriendo. Era hostilizado por el *establishment* económico -al que el gobierno, cultivando una retórica nacionalista, calificaba de “capitalismo apátrida”-, y estaba



enfrentado con los partidos políticos, con los que no quería negociar, con la CGT y hasta con los “empresarios nacionales”. Los jefes militares apreciaron que Levingston era tan poco capaz como Onganía de encontrar la salida, y cuando en marzo de 1971 se produjo una nueva movilización de masas en Córdoba -el “viborazo”, en que las organizaciones armadas se hicieron claramente presentes- decidieron su remoción y su reemplazo por el general Lanusse, quien por entonces aparecía como el único jefe militar con envergadura política para conducir el difícil proceso de la retirada.

En marzo de 1971, Lanusse anunció el restablecimiento de la actividad política partidaria y la próxima convocatoria a elecciones generales, subordinadas sin embargo a un Gran Acuerdo Nacional, sobre cuyas bases había venido negociando con los dirigentes de La Hora del Pueblo. Finalmente, las Fuerzas Armadas optaban por dar prioridad a la salida política y con ella aspiraban a reconstruir el poder y la legitimidad de un Estado cada vez más jaqueado. Mientras la cuestión del desarrollo quedaba postergada, seguía siendo acuciante la de la seguridad, que los militares ya no podían garantizar. Las discrepancias sobre cómo enfrentar a las organizaciones armadas y la protesta social eran crecientes y anunciaban futuros dilemas: mientras se creó un fuero antisubversivo y tribunales especiales para juzgar a los guerrilleros, algunos sectores del Estado y las Fuerzas Armadas iniciaron una represión ilegal: secuestro, tortura y desaparición de militantes, o asesinatos a mansalva, como ocurrió con un grupo de guerrilleros detenidos en la base aeronaval de Trelew en agosto de 1972. Similares vacilaciones había con la política económica, hasta que se optó por renunciar a cualquier rumbo y se disolvió el Ministerio de Economía, repartido en secretarías sectoriales que se confiaron a representantes de cada una de las organizaciones corporativas. Así,

en un contexto de inflación desatada, fuga de divisas, caída del salario real y desempleo, agravado por la ola generalizada de reclamos, el tironeo sectorial se instaló en el gobierno mismo, presto a conceder lo que cada uno pedía.

Para el gobierno, el centro de la cuestión estaba en el Gran Acuerdo Nacional (GAN), que empezó siendo una negociación amplia y se convirtió en un tironeo entre Lanusse y Perón, bajo la mirada pasiva del resto. La propuesta inicial del gobierno contemplaba una condena general de la “subversión”, garantías sobre la política económica y el respeto a las normas democráticas, y que se asegurara a las Fuerzas Armadas un lugar institucional en el futuro régimen, desde donde tutelar la seguridad. Pero lo principal era acordar una candidatura presidencial de transición, para la que el propio general Lanusse se ofrecía. Algunos de los puntos, sobre el programa económico y las normas democráticas, ya habían sido establecidos en La Hora del Pueblo. Asegurar el lugar institucional de las Fuerzas Armadas era imposible, dado el clima del momento. Los otros dos puntos -la condena de la subversión y el acuerdo de la candidatura- tenían que ver principalmente con la táctica de Perón.

En noviembre de 1971, Perón relevó a Paladino -que había negociado hasta entonces los acuerdos con los radicales y los militares- y lo reemplazó por Héctor J. Cámpora, cuya principal virtud era la total subordinación a la voluntad del líder exiliado. Perón se propuso conducir la negociación sin renunciar a ninguna de sus cartas. Como además se hacía cargo del clima social y político del país, no resignó su papel de referente de la ola de descontento social ni renunció al apoyo proclamado por buena parte de las organizaciones armadas. Más aún, las alentó y legitimó permanentemente, y, cuando en 1972 se organizó la Juventud Peronista, incluyó a su dirigente más notorio, Rodolfo Galimberti, en su propio Comando estratégico. Al mismo tiempo, alentó a La

Hora del Pueblo y organizó su propio GAN, el Frente Cívico de Liberación Nacional, con partidos aliados y luego con la CGT-CGE. En verdad, nadie sabía a dónde quería llegar Perón.

Lanusse planteó al principio que el Acuerdo era condición para las elecciones, pero progresivamente tuvo que reducir sus exigencias, vista la imposibilidad de obligar a Perón a negociar. En el mes de julio de 1972, y convencido de que nada podía esperarse de Perón, Lanusse optó por asegurar la condición mínima: que Perón no sería candidato, a cambio de su propia autoproscricción. Tácitamente, Perón aceptó las condiciones. En noviembre de 1972, regresó al país, por unos pocos días. No trató con el gobierno pero dialogó con los políticos y en particular con el jefe del radicalismo, Ricardo Balbín, sellando el acuerdo democrático. Cultivó su imagen pacificadora, habló de los grandes problemas del mundo, como los ecológicos, y evitó cualquier referencia urticante. Por último, organizó su combinación electoral: el Frente Justicialista de Liberación, con una serie de partidos menores, al que impuso la fórmula presidencial: Héctor J. Cámpora, su delegado personal, y Vicente Solano Lima, un político conservador que desde 1955 acompañaba fielmente a los peronistas.

Perón mantuvo su juego pendular, entre la provocación y la pacificación. La fórmula constituía un desafío a los políticos de La Hora del Pueblo y sobre todo a los sindicalistas, a quienes excluyó de la negociación, y un aval al ala contestataria del movimiento, que ya rodeaba a Cámpora y le dio a la campaña electoral un aire desafiante. “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, su lema, señalaba el carácter ficticio de la representación política, por lo que resultaba ser una suerte de transacción entre los partidarios de la salida electoral y quienes la desdeñaban, en pro de las propuestas de liberación nacional. Los radicales, con la candidatura de Balbín, aceptaban el triunfo peronista y su futuro papel de minoría

legitimadora, mientras que a derecha e izquierda surgieron otras fórmulas de escasa significación. La Juventud Peronista dio el tono a la campaña electoral, que permanentemente rozó los límites de los acuerdos de garantías entre los partidos y constituyó una verdadera culminación de la polarización de la sociedad contra el poder militar.

El clima se prolongó luego del triunfo electoral del 11 de marzo de 1973 -cuando el peronismo triunfó con casi el 50% de los votos- hasta el 25 de mayo siguiente, fecha de la asunción de Cámpora. Ese día memorable asistieron el presidente chileno Salvador Allende y el cubano Osvaldo Dorticós. Bajo la advocación de las dos experiencias socialistas del continente, la sociedad movilizada y sus dirigentes escarnecieron a los militares, transformando la retirada en huida, y liberaron de la cárcel a los presos políticos condenados por actos de subversión. Las formas institucionales fueron salvadas por una inmediata ley de amnistía dictada por el Congreso. Para muchos, parecía llegada la hora del “argentino”. Otros, más cautamente, tomaban nota del relevo de Galimberti ordenado por Perón, luego de que este dirigente amenazara con la formación de “milicias populares”. Esos y otros diagnósticos -pues todo era virtualmente posible aquel 25 de mayo- pasaban por los designios, secretos pero sin duda geniales, de Perón, identificado como el salvador de la nación.

Este fenómeno, sin duda singular, de ser a la vez tantas cosas para tantos, tenía que ver con la heterogeneidad del movimiento peronista y con la decisión y la habilidad de Perón para no desprenderse de ninguna de sus partes. Pero era más que eso: como ha escrito José Luis Romero, la figura simbólica de Perón, una y muchas a la vez, había llegado a reemplazar a su figura real. Para todos, Perón expresaba un sentimiento general de tipo nacionalista y popular, de reacción contra la reciente experiencia de

desnacionalización y privilegio. Para algunos -peronistas de siempre, sindicalistas y políticos- esto se encarnaba en el líder histórico, que, como en 1945, traería la antigua bonanza, distribuida por el Estado protector y munificente. Para otros -los más jóvenes, los activistas de todos los pelajes- Perón era el líder revolucionario del Tercer Mundo, que eliminaría a los traidores de su propio movimiento y conduciría a la liberación, nacional o social, potenciando las posibilidades de su pueblo. Inversamente, otros, encarnando el ancestral anticomunismo del movimiento, veían en Perón a quien descabezaría con toda la energía necesaria la hidra de la subversión social, más peligrosa y digna de exterminio en tanto usurpaba las tradicionales banderas peronistas. Para otros muchos - sectores de las clases medias o altas, quizá los más recientes descubridores de sus virtudes- Perón era el pacificador, el líder descarnado de ambiciones, el “león herbívoro” que anteponía el “argentino” al “peronista”, capaz de encauzar los conflictos de la sociedad, realizar la reconstrucción y encaminar al país por la vía del crecimiento hacia la “Argentina potencia”. El fenómeno sorprendente de 1973, la maravilla del carisma de Perón, fue su capacidad para sacar a la luz tantos anhelos insatisfechos, mutuamente excluyentes pero todos encarnados con alguna legitimidad en el anciano líder que volvía al país. El 11 de marzo de 1973, el país votó en forma masiva contra los militares y el poder autoritario, y creyó que se iban para no volver. Pero no votó por alguna de estas opciones, todas ellas contenidas en la fórmula ganadora, sino por un espacio social, político y también militar, en el que los conflictos todavía debían dirimirse.

#### 1973: UN BALANCE

Para sus protagonistas, las raíces de esos conflictos, sin duda

violentos, se hallaban en una economía exasperante por su sucesión de arranques y detenciones, de promesas no cumplidas y frustraciones acumuladas. Sin embargo, vista desde una perspectiva más amplia -y sin duda mejorada por posteriores calamidades, todavía no imaginadas en 1973-, la economía del país tuvo un desempeño medianamente satisfactorio, que se habría de prolongar hasta 1975, y que no justificaba los pronósticos apocalípticos, aunque tampoco las fantasías de la Argentina potencia.

Lo más notable fue el crecimiento del sector agropecuario pampeano, que, revirtiendo el largo estancamiento y retroceso anterior, se inició a principios de los años sesenta y se prolongó hasta el comienzo de los ochenta. En estos años prósperos, el mundo se encontraba en condiciones de transformar al menos parte de su necesidad de alimentos en demanda efectiva, y se abrieron nuevos mercados para los granos y aceites argentinos, particularmente en los países socialistas -que purgaban el fracaso de su agricultura- y en los que estaban disfrutando de los buenos precios del petróleo o comenzaban su crecimiento industrial.

El sector agrario pampeano se transformó sustancialmente, así como diversos islotes modernos en el interior tradicional, como el Valle del Río Negro. El Estado promovió el cambio de diversas maneras -hubo créditos y subsidios para las inversiones, y una acción sistemática del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-, aunque no cambió su tradicional política de transferir recursos a la economía urbana, que se mantuvo con apenas algunas modificaciones en los métodos. Pero lo decisivo fueron los efectos de la modernización general de la economía. La fabricación local de tractores y cosechadoras, y también silos y otras instalaciones, permitió una mecanización total de la tarea y cambios sustanciales en las formas del almacenaje y el transporte. Las empresas agroquímicas -en general filiales de grandes empresas

extranjeras- introdujeron las semillas híbridas: a principios de la década de 1970 se obtuvieron éxitos espectaculares con el maíz, y luego con el sorgo granífero, el girasol, el trigo y la soja. Más tarde fueron los plaguicidas y los herbicidas, y finalmente los fertilizantes sintéticos. En la organización de la explotación fueron introduciéndose criterios empresariales modernos, facilitados por una flexibilización del sistema de arrendamientos y la incorporación a la explotación de empresarios que no poseían tierra. Hacia 1985, punto final de esta onda expansiva, la superficie cultivada en la región pampeana se había extendido en alrededor del 30% respecto de 1960, sobre todo por conversión de explotaciones ganaderas en agrícolas, pero la productividad de la tierra se había duplicado y la de la mano de obra cuadruplicado.

Esta verdadera revolución productiva permitió el crecimiento de las exportaciones de granos y aceites, mientras que los mercados para la carne continuaron estancados o en retroceso. También crecieron las exportaciones industriales: maquinaria agrícola, máquinas herramienta, automotores, productos siderúrgicos y químicos pudieron competir en los países vecinos, aprovechando a veces las oportunidades de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Así, poco a poco la fuerte constricción que el sector externo representaba para el conjunto de la economía se fue atenuando, el impacto de las crisis cíclicas disminuyó y el margen para el crecimiento industrial aumentó. La fase traumática dejó lugar a una expansión suave y sostenida, que arrancó en los años de la presidencia de Illia y se mantuvo pese a los cambios de gobierno y a los avatares de las políticas económicas.

Como mostraron Gerchunoff y Llach, el producto industrial creció en forma sostenida luego de la gran crisis de 1963, sin ningún año de retroceso hasta 1975. Parte de ese crecimiento corresponde a la maduración de muchas de las inversiones realizadas luego de

1958, pero también contribuyó a él un conjunto variado de empresas nacionales, de ramas dinámicas o vegetativas, grandes o medianas, que repuntaron luego de soportar el primer impacto de la instalación de las empresas extranjeras: algunas captaron un segmento dinámico y no explotado del mercado, otras crecieron a costa de la competencia, apoyadas en una mayor eficiencia, pero también por un sostenido crecimiento del mercado interno, que dio nueva vida a los sectores más tradicionales como el textil, el de alimentos o el de electrodomésticos. Las empresas nacionales, luego de sufrir una fuerte depuración, se adecuaron a las nuevas condiciones, acomodaron sus posibilidades al espacio que le dejaban las grandes empresas extranjeras, absorbieron lo que podían de los nuevos socios o encontraron formas de asociación, como el uso de patentes y licencias o el suministro de partes para las grandes plantas de montaje. Simultáneamente, aprovecharon un terreno en el que se movían con facilidad: el uso de los créditos subsidiados o de los mecanismos de promoción del Estado. En un proceso que Jorge Katz denominó de “maduración”, aumentaron su escala -las fábricas reemplazaron a los talleres- y luego hicieron un esfuerzo para hacer más eficiente su organización y sus procesos. Este impulso a la racionalización -que requirió de muchos ingenieros, administradores y ejecutivos en general, corazón de los nuevos sectores medios- fue común por entonces a las empresas nacionales y a muchas de las extranjeras, como las automotrices, que en su instalación se habían apartado de las normas de funcionamiento de sus matrices. Los efectos de estas políticas se advirtieron en las reacciones de los trabajadores y en su creciente sensibilidad a los problemas de las plantas.

Al igual que la agricultura, la industria se modernizó y se acercó, como nunca antes ni después, a los estándares internacionales. Como se señaló, su crecimiento se relaciona en parte con los



procesos de concentración y depuración, y también con el aumento de la inversión del Estado, las compras de las empresas públicas o las nuevas obras de infraestructura, o la expansión de un sector consumidor pudiente, dispuesto a cambiar su automóvil cada dos años. Pero también, invirtiendo la tendencia iniciada en 1955, hubo un crecimiento del mercado interno debido al aumento del empleo industrial y sobre todo de la construcción, junto con una recuperación en los ingresos de los asalariados. La tendencia de la fase traumática se invirtió y su participación en el producto se elevó -con excepción de los agitados años de 1971 y 1972- hasta superar el 45% del Producto Bruto Interno (PBI). Más allá de las políticas racionalizadoras, los sindicatos conservaron su eficacia en la defensa de sus representados, aunque probablemente esto no valió para la masa sin duda vasta de trabajadores no sindicalizados, de donde provenían muchos de los protagonistas de las nuevas formas de protesta social.

Hacia 1973, esa expansión ya se acercaba a los límites de la capacidad instalada, que por falta de una importante inversión privada no había crecido sustancialmente. La fuerte conflictividad social, sustentada en un ciclo de crecimiento y de elevación de las expectativas, no podría ser satisfecha con una fácil redistribución, según la fórmula histórica del peronismo. Pero esta fórmula contenía otros elementos apreciados por quienes depositaban su fe en Perón: una regulación estatal mayor de las relaciones entre las partes y un lugar más amplio para los excluidos en la mesa de la negociación. En suma, la iniciativa para la paz social pasaba al Estado.

Pese al declamado liberalismo de los sectores propietarios, desde 1955 no habían disminuido ni los atributos del Estado ni su capacidad para definir las reglas del juego. Por allí pasaban grandes decisiones, como la transferencia de ingresos del sector exportador

agrario al industrial, pero también otras más específicas, a través del uso del crédito subsidiado, la promoción, las compras de empresas estatales o los contratos de las obras públicas. Para los empresarios todo ello representaba la posibilidad de ganancias más fáciles y seguras que las derivadas de mejorar la eficiencia o la competitividad, así como de pérdidas igualmente fáciles y rápidas, de modo que el control de sus políticas era una cuestión vital.

Pero ni ellos ni nadie controlaban del todo el conjunto de sus estructuras, crecidas a veces por agregación y escasamente subordinadas a una única voluntad ejecutiva. La experiencia del general Onganía -la más sistemática para poner en pie lo que Guillermo O'Donnell llamó el “Estado burocrático autoritario”- muestra esas dificultades aun para las Fuerzas Armadas, proclives a identificar su propia estructura institucional con la del Estado. Los otros actores corporativos -los *lobbies* empresarios, los sindicatos, la Iglesia-, protagonistas principales de la puja sectorial, solían concluir sus conflictos en empates o bloqueos recíprocos, como el logrado por el sindicalismo ante los intentos de reducir la dimensión del Estado benefactor. El sorprendente poder conservado por el sindicalismo después de 1955 muestra otro aspecto de ese Estado incontrolable: las frecuentes alianzas entre dos competidores -industriales y gremialistas, por ejemplo- para sacar beneficio a costa de un tercero o de la comunidad toda.

Beneficios inmediatos podían traer aparejadas complicaciones futuras. A través de la reiterada convocatoria a los sindicalistas para participar de la puja, los sectores subordinados tuvieron desde 1945 algún acceso al Estado y a sus decisiones. Durante el gobierno de Perón, su poder y su voluntad de controlar a cualquier fuerza social o política aseguraron la disciplina. Después de 1955, la conducción vanguardista de los sindicatos fue para los empresarios una garantía de la desmovilización de los trabajadores y de la negociación

siempre posible. La ruptura de ese equilibrio luego de 1966, la fuerte movilización social y el desborde de cualquier instancia mediadora, así como la incapacidad demostrada por los militares para custodiar el poder, mostraron el peligro de que porciones importantes de los resortes del Estado cayeran en manos dudosas. Quienes en 1973 confiaron su suerte a Perón esperaban que fuera capaz, como en 1945, de controlar la movilización social, y a la vez de disciplinar a quienes, como aprendices de hechiceros, apelaran en la puja corporativa a su capacidad de presión. Unos y otros debían ser organizados y disciplinados en el Estado mismo. El acuerdo entre la CGE y la CGT empezó a dibujar la figura del pacto social y la gran negociación entre las principales corporaciones.

En 1973, podía vislumbrarse un futuro para la escena corporativa, en la que Perón había demostrado saber manejarse con soltura. Sobre la escena democrática, en cambio, había muchas más dudas, pese a la espectacular experiencia electoral de marzo. Los partidos políticos que debían ocuparla no entusiasmaban mayormente. El Partido Justicialista apenas existía en el conjunto de lo que se llamaba, de manera un poco eufemística, el Movimiento, y Perón nunca lo consideró como otra cosa que una fachada. Los restantes, luego de tanto tiempo de inactividad o de actividad sólo parcial, eran un conjunto de direcciones anquilosadas, verdaderas claques vacías, con pocas ideas y con muy escasa capacidad para representar los intereses de la sociedad. La Hora del Pueblo, que cumplió un importante papel en la salida electoral, no llegó a constituir un espacio de discusión y negociación reconocido; más allá de los acuerdos iniciales, Perón sólo la usó como escenario para mostrar a la sociedad su fisonomía pacificadora, y a lo sumo para garantizar el respeto de las formas constitucionales. El resto de los partidos, empezando por la Unión Cívica Radical, participaron del embeleso general con Perón o se sintieron abrumados por la culpa

de la proscripción y se limitaron a aceptar sus términos, renunciando de entrada a su función de control y alternativa. La idea misma de democracia, de representación política de los intereses sociales, de negociación primero en el ámbito de cada partido y luego en los espacios políticos comunes, de constitución colectiva del poder, tenía escaso prestigio en una sociedad largamente acostumbrada a que cada una de sus partes negociara por separado con el poder constituido. La política parecía una ficción que servía para velar la verdadera negociación entre los factores reales de poder. Los sectores propietarios se sentían mucho más cómodamente expresados por sus organizaciones corporativas. Los sectores populares, por su parte, que podrían haber estado interesados en la constitución de un ámbito específicamente político, no encontraron para ello ni representación ni voceros entre los actores políticos, ni mucho menos entre los corporativos.

Esto fue crucial para el destino de la experiencia que se iniciaba en 1973 con una elección donde la voluntad popular se expresó tan libre y acabadamente como en 1946. La ola de movilización, que estaba llevando el enfrentamiento social a un punto extremo, contenía en sus orígenes un importante elemento de participación, visible en cada uno de los lugares de la sociedad donde se gestaba, desde una sociedad vecinal a un aula universitaria o una fábrica. Pero sus elementos potencialmente democráticos se cruzaban con toda una cultura política espontánea -acuñada en largos años de autoritarismo y democracia fingida- que llevaba a identificar el poder con el enemigo y la represión, a menos que se lo “tomara”, para reprimir a su vez al enemigo. Mientras los partidos políticos carecían de fuerza o de convicción para hacerse oír entre ellos, los activistas formados en las matrices del peronismo, el catolicismo o la izquierda tendieron a acentuar y dar forma a esta cultura espontánea y a incluirla -como se vio- en la lógica de la guerra. Así,

no fue difícil que las organizaciones armadas se insertaran en el movimiento popular, en los barrios, en las fábricas, en el movimiento estudiantil, llenando un vacío que debía ser ocupado. Los Montoneros, particularmente, tuvieron una enorme capacidad para combinar la acción clandestina con el trabajo de superficie, que realizaron a través de la Juventud Peronista. Pero al hacerlo introdujeron un sesgo en el desarrollo del movimiento popular: lo encuadraron, lo sometieron a una organización rígida, cuya estrategia y tácticas se elaboraban en otras partes, y eliminaron todo lo que la movilización tenía de espontáneo, de participativo, de plural. Convertida en parte de una máquina de guerra, la movilización popular fue apartada de la alternativa democrática y llevada a dar en otro terreno el combate final.

#### LA VUELTA DE PERÓN

El 25 de mayo de 1973, asumió el gobierno el presidente Héctor J. Cámpora, y el 20 de junio retornó al país Juan Domingo Perón. Ese día, cuando se había congregado en Ezeiza una inmensa multitud, un enfrentamiento entre grupos armados de distintas tendencias del peronismo provocó una masacre. El 13 de julio, Cámpora y el vicepresidente Solano Lima renunciaron; ausente el titular del Senado, asumió la presidencia el de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, que era yerno de José López Rega, el secretario privado de Perón y a la vez ministro de Bienestar Social. En septiembre se realizaron las nuevas elecciones y la fórmula Perón-Perón, que el líder compartió con su esposa Isabel (*née* María Estela Martínez) alcanzó el 62% de los votos. El 1º de julio del año siguiente, murió Perón e Isabel lo reemplazó, hasta que fue depuesta por los jefes militares el 24 de marzo de 1976. Los tres años de la segunda experiencia peronista, verdaderamente prodigiosos por la

concentración de acontecimientos y sentidos, clausuraron -de manera desdichada y tenebrosa- toda una época de la historia argentina.

Es difícil saber en qué momento de su exilio Perón dejó de verse a sí mismo como el insobornable jefe de la resistencia, dispuesto a desbaratar las tentaciones provenientes del poder, y se consideró el destinado a pilotear el vasto proyecto de reconstrucción que asumió como última misión de su vida. Puede dudarse, incluso, de si se trató de una decisión deliberada o si resultó arrastrado por circunstancias incontrolables aun para su inmenso talento táctico. Lo cierto es que, puesto en el juego, armó su proyecto -parecido pero distinto al de 1945- sobre tres bases: un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, un pacto social con los grandes representantes corporativos y una conducción más centralizada de su movimiento, hasta entonces desplegado en varios frentes y dividido en estrategias heterogéneas. Para que funcionara, Perón necesitaba que la economía tuviera un desempeño medianamente satisfactorio -las expectativas eran buenas- y que pudiera reforzarse el poder del Estado, tal como lo reclamaba la mayoría de la sociedad. Éste era un punto débil: los mecanismos y los instrumentos estaban desgastados y resultaron ineficaces, y el control que Perón podía tener no era pleno, pues las Fuerzas Armadas se mostraban reticentes, pese a la rehabilitación mutua que se concedieron con Perón; el gobierno, finalmente, resultó corroído por la formidable lucha desencadenada dentro del movimiento. Así, una de las premisas de su acción falló de entrada. El pacto social funcionó mal casi desde el principio y terminó hecho añicos, mientras que el pacto democrático, aunque funcionó formalmente bien y se respetaron los acuerdos, al final resultó irrelevante pues no sirvió ni para constituir una oposición eficiente ni para suministrar de por sí, cuando los otros mecanismos fallaron,

el respaldo necesario para el mantenimiento del gobierno constitucional.

El Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional, presentado en mayo de 1973, pese a la concesión al clima de época que había en su título, consistía en un intento de superar las limitaciones al crecimiento de una economía cuyos rasgos básicos no se pensaba modificar. No había en él nada que indicara una orientación hacia el “socialismo nacional”, y tampoco un intento de buscar nuevos rumbos al desarrollo del capitalismo. Como en 1946, Perón recurrió para pilotearlo a un empresario exitoso, en este caso ajeno al peronismo: José Ber Gelbard, jefe de la CGE, donde se nucleaban la mayoría de las empresas de capital básicamente nacional. Sus objetivos, acordes con los cambios ya consolidados en la estructura económica del país, eran fuertemente intervencionistas y, en menor medida, nacionalistas y distribucionistas, y no implicaban un ataque directo a ninguno de los intereses establecidos.

Siguiendo las tendencias de la década anterior, se esperaba apoyar el crecimiento de la economía tanto en una expansión del mercado interno -según la tradición de los empresarios que respaldaban a ambos partidos mayoritarios- cuanto en el crecimiento de las exportaciones. Las perspectivas de las exportaciones tradicionales eran excelentes: muy buenos precios y posibilidad de acceder a nuevos mercados, como la Unión Soviética; la nacionalización del comercio exterior apuntaba a asegurar la transferencia de parte de los beneficios al sector industrial, aunque a la vez se cuidó mucho de preservar los ingresos de los sectores rurales, cuya productividad se quiso incrementar combinando alicientes y castigos. Uno de ellos -la posibilidad de expropiar las tierras sin cultivar, incluido en el proyecto de ley agraria- desencadenó a la larga un fuerte conflicto. Pero sobre todo se trató

de continuar expandiendo las exportaciones industriales a través de convenios especiales, como el realizado con Cuba para vender automóviles y camiones.

Las empresas nacionales, que también deberían participar de los beneficios de las exportaciones, fueron respaldadas con líneas especiales de crédito y con el mecanismo del *compre* argentino en las empresas públicas; para lograr mayor eficiencia y control, éstas se integraron en una Corporación de Empresas Nacionales. Por otra parte, se apoyó especialmente algunos grandes proyectos industriales, de “interés nacional”, mediante importantes subvenciones. Muchos resortes pasaban por las manos del Estado: el manejo centralizado del crédito y también el control de precios, fundamental para la política de estabilización. Pero además, el Estado aumentó considerablemente sus gastos a través de obras sociales e incrementó el número de empleados públicos y de empresas del Estado; contribuyó así a activar la economía interna, aunque a costa de un déficit creciente.

La clave del programa residía en el pacto social, con el que se procuraba solucionar el problema clásico de la economía, ante el cual habían fracasado los sucesivos gobiernos desde 1955: la capacidad de los distintos sectores, empeñados en la puja distributiva, para frenarse mutuamente. Mientras Onganía había fracasado en su intento de cortar el nudo con la pura autoridad, Perón recurría a la concertación, un mecanismo muy común en la tradición europea, pero además muy fácil de filiar en su propia concepción de la comunidad organizada. El Estado debía disciplinar a los actores combinando persuasión y autoridad. Hubo concertaciones sectoriales y una mayor, que las subsumía a todas, suscripta por la CGE y la CGT, que estableció el congelamiento de los precios y la supresión por dos años de las convenciones colectivas o paritarias. Esto era duro de aceptar para el sindicalismo y fue



compensado con un inmediato aumento del 20% general en los salarios, muy distante sin embargo de las expectativas generadas por el advenimiento del gobierno popular.

Los primeros resultados de este programa de estabilización fueron espectaculares. La inflación, desatada con intensidad en 1972, se frenó bruscamente, mientras que la excelente coyuntura del comercio exterior permitió superar la angustiante situación de la balanza de pagos y acumular un buen superávit, y las mejoras salariales y el incremento de gastos del Estado estimulaban el aumento de la actividad interna. Por esa vía, se llegó pronto a estar cerca de la plena utilización de la capacidad instalada. Pero desde diciembre de 1973 comenzaron a acumularse problemas. El incremento del consumo hizo reaparecer la inflación, mientras que el aumento del precio del petróleo en el mundo -que ya anunciaba el fin del ciclo de prosperidad de la posguerra- encareció las importaciones, empezó a complicar las cuentas externas e incrementó los costos de las empresas. Finalmente, el Mercado Común Europeo se cerró para las carnes argentinas. Se trataba de una crisis cíclica habitual, pero su resolución clásica estaba vedada a un gobierno que había hecho de la “inflación 0” una bandera y que sabía que una devaluación tropezaría con fuertes resistencias. El pacto social debía servir para encontrar la manera equitativa y razonable de repartir los mayores costos, pero las reglamentaciones cada vez más frondosas a las que se apeló, que se cumplieron escasamente, no sólo revelaron las dificultades de la persuasión, sino las crecientes falencias del Estado para hacer valer su autoridad. Así, antes de que el gobierno popular hubiera cumplido un año, estaba de nuevo planteada en forma abierta la lucha sectorial, cuyas condiciones, sin embargo, existían desde el mismo comienzo de esta experiencia populista.

Los actores del pacto social demostraron escasa capacidad y

poca voluntad para cumplirlo. La CGE, investida de la delegación global de los empresarios, los representaba mal, y aun a sus instituciones primarias, que en muchos casos habían sido forzadas a encuadrarse en ella, de acuerdo con las concepciones organicistas de Perón. Es probable que en muchos casos, por las mismas razones, hayan firmado los acuerdos sin mucha convicción, esperando que el paso del tiempo trajera condiciones mejores. Pero sobre todo, se descubrió que no podían asegurar que sus miembros cumplieran lo acordado. Los empresarios -y muy en especial los chicos o medianos, difíciles de controlar- encontraron muchas maneras de violar el pacto: desabastecimiento, sobrepuestos, mercado negro, exportaciones clandestinas; también hallaron una forma de manifestar su escaso entusiasmo: la inversión privada fue relativamente magra.

La CGT no se hallaba cómoda y a gusto con un gobierno peronista con el cual no servía su táctica clásica de golpear y negociar sin comprometerse, la única que sabían manejar cabalmente. No sólo Perón debía subordinar -como siempre- a quienes lo apoyaban, sino que los sindicalistas carecían de tradición, instrumentos y objetivos para coger. Por otra parte, la movilización de los trabajadores, que los ponía en jaque, les impedía negociar con libertad. El triunfo electoral avivó las expectativas de la sociedad y dio un nuevo estímulo a la “primavera de los pueblos”; en las fábricas, se tradujo en un generalizado incremento de las reivindicaciones y en un estilo de lucha que incluía ocupaciones de plantas, que rebasó a las direcciones sindicales y hasta cuestionó la autoridad de los gerentes y patrones. Antes de que las organizaciones guerrilleras llegaran a tener un papel activo, según Juan Carlos Torre, las fábricas estuvieron, por obra de la movilización sindical, “en estado de rebeldía”.

En la mayoría de los casos esa movilización concluía con

ventajas salariales directas o encubiertas, lo que aumentaba la amenaza sobre los dirigentes nacionales obligados a atarse al pacto. Perón se dedicó a fortalecerlos; desde que retornó al país los halagó de mil maneras distintas, reivindicando su imagen pública, amenazada por la izquierda peronista, y reinstalándolos simbólicamente en el centro mismo del movimiento. Una modificación de la ley de asociaciones profesionales reforzó la centralización de los sindicatos, aumentó el poder de sus autoridades y prolongó sus mandatos, de modo que pudieron enfrentar el desafío antiburocrático, pero no impidió que reclamaran la convocatoria a paritarias y exigieran periódicos ajustes salariales. Violado de uno y otro lado, el pacto se fue desgastando ante la impotencia de las autoridades. El propio gobierno, que había congelado las tarifas públicas, tuvo interés en una renegociación, que se produjo en marzo de 1974, con una ronda general de aumentos que no satisfizo a nadie. La puja continuó. El 12 de junio Perón convocó a una concentración masiva en la histórica Plaza de Mayo, dramáticamente pidió a las partes disciplina y amenazó con renunciar. Fue la última aparición en público antes de su muerte.

En la segunda fase del gobierno peronista, los actores cambiaron de estrategia y la puja recuperó sus formas clásicas. En la CGT se impusieron los partidarios de la negociación dura, en la mejor tradición vanderista, encarnada precisamente por su sucesor entre los metalúrgicos, Lorenzo Miguel. Isabel Perón -alrededor de cuya figura simbólica todas las fuerzas concertaron una tregua tácita- se lanzó a construir una base propia de poder, rodeada de un grupo de fieles, de escasa tradición en el peronismo, que encabezaba la extraña y siniestra figura de José López Rega, a quien apodaban “el Brujo” por su gusto por las prácticas esotéricas. Pese a que Isabel se dedicó a parodiar las fórmulas y los gestos del líder muerto para

capitalizar su herencia simbólica, su política se apartó totalmente de la que aquél había trazado en sus últimos años. Isabel se propuso homogeneizar el gobierno, colocando a amigos e incondicionales en los puestos clave y rompiendo una a una las alianzas que había tejido Perón, que en el futuro esperaba reemplazar por otras nuevas, con los militares y los empresarios. En algunos de esos propósitos, Isabel y los sindicalistas coincidieron. Así, provocaron la renuncia del ministro Gelbard y, aprovechando los mecanismos de la nueva ley de asociaciones y de la ley de seguridad, desalojaron sistemáticamente a las cabezas del sindicalismo opositor: Raimundo Ongaro, Agustín Tosco y René Salamanca perdieron sus sindicatos, y la agitación gremial disminuyó de manera considerable en 1975.

Pero básicamente se enfrentaron alrededor de los restos del pacto social. En 1975 la crisis económica urgía a tomar medidas drásticas, que terminarían de liquidarlo: los problemas de la balanza de pagos eran muy graves, la inflación estaba desatada, la puja distributiva era encarnizada y el Estado estaba totalmente desbordado. En ese contexto, el gobierno debió acceder a la tradicional demanda de la CGT y convocó a paritarias, de modo que el ajuste inminente debía realizarse en el momento mismo en que éstas se encontraban discutiendo los ajustes salariales, lo que generó una situación inmanejable. A fines de marzo, la mayoría de los gremios había acordado aumentos del 40%; el 2 de junio, el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, del equipo de López Rega, provocó un *shock* económico al decidir una devaluación del 100% y un aumento de tarifas y combustibles similar o superior. El “rodrigazo” echó por tierra los aumentos acordados; los sindicalistas volvieron a exigir en las paritarias y los empresarios concedieron -con llamativa facilidad- aumentos que llegaban al 200%. La presidenta decidió no homologarlos y generó una masiva resistencia de los trabajadores, que culminó en movilizaciones en la

Plaza de Mayo y un paro general de 48 horas. El hecho era notable porque, contra toda una tradición, la CGT encabezaba la acción contra un gobierno peronista. Isabel cedió, López Rega y Rodrigo renunciaron, los aumentos fueron homologados y devorados por la inflación en sólo un mes. En medio de una crisis económica galopante, el gobierno entró en su etapa final.

La lucha en torno del pacto social fue paralela a la que se libró en el seno del peronismo, involucrando al gobierno y hasta al mismo Estado, y sobre todo definiendo la suerte del movimiento popular. Esa lucha estaba implícita en las equívocas relaciones entre Perón y quienes, alrededor de Montoneros y la Juventud Peronista, constituían la llamada “tendencia revolucionaria” del peronismo. Hasta 1973, unidos en la lucha común contra los militares, ni uno ni los otros tenían interés en hacerlas explícitas. Perón cimentaba su liderazgo en su capacidad de incluir a todos los que invocaran su nombre, desde los jóvenes revolucionarios hasta los sindicalistas, los políticos provinciales más conservadores o los grupos de choque de extrema derecha. Su estrategia de enfrentamiento con quienes lo expulsaron del poder consistía en utilizar a los jóvenes, y a los sectores populares que ellos movilizaban, para hostigarlos, y a la vez para presentarse como el único capaz de contenerlos. En ese sentido, repetía su estrategia de 1945 del “bombero piromaníaco”.

Montoneros y la Juventud Peronista aprovecharon su proclamada adhesión a Perón para insertarse más profundamente en el movimiento popular y servirse de su espectacular crecimiento luego de 1973, cuando la sociedad entera pareció entrar en una etapa de rebelión y creatividad. En la cultura política de estos sectores, incorporados en forma masiva al peronismo, podían reconocerse dos grandes concepciones. Una de ellas se apoyaba en la vieja tradición peronista, nacionalista y distribucionista, alimentada durante la larga exclusión por la ilusión del retorno del

líder, y con él, mágicamente, de los buenos tiempos en los que la justicia social coronaba el ascenso individual. Quienes permanecieron fieles a lo que sin duda era la capa más profunda y sólida de la cultura política popular adherían al viejo estilo político, autoritario, faccioso, verticalista y visceralmente anticomunista. La otra, menos precisa, arraigó en una parte importante de los sectores populares, pero sobre todo en quienes se agregaron tarde al peronismo, e incorporó la crítica radical de la sociedad, condensada en la consigna “liberación o dependencia”. Ambas concepciones, en un contexto de guerra, se definieron en consignas de batalla: la “patria peronista” o la “patria socialista”. Los Montoneros, que aspiraban al principio a encarnar a ambas, terminaron identificados con la segunda, mientras el sindicalismo y los grupos de extrema derecha se convirtieron en abanderados de la primera.

El triunfo de 1973 acabó con los equívocos dentro del peronismo y abrió la lucha por la conducción real y simbólica del movimiento y del pueblo. Otros grupos revolucionarios no tuvieron los dilemas de los Montoneros. El trotskista ERP, la otra gran organización armada, no creía ni en la vocación revolucionaria del peronismo ni en la democracia misma, de modo que, pasada la breve tregua de 1973, fácilmente retomó la lucha en los mismos términos que contra los militares. Otras líneas revolucionarias dentro del peronismo nunca habían contado con el posible apoyo de Perón, y estaban dispuestas a una guerra larga y de posiciones, en la que la victoria electoral de 1973 era apenas una etapa y una circunstancia. Para Montoneros, que había crecido identificándose plenamente con Perón y el peronismo, el triunfo de marzo abría una lucha decisiva por el control del poder y del discurso peronista, ambos indivisibles, y concentraron todas sus energías en dominar a ambos, expulsando a los enemigos “infiltrados y traidores” -una amplia categoría en la que cabían los políticos, las organizaciones

sindicales, los empresarios y los colaboradores directos de Perón- y ganando para su causa al propio Perón, presionado a ratificar la imagen que de él habían construido y que él mismo había alentado.

A principios de 1973, empujados por la euforia electoral y estimulados por el espacio que les había abierto el propio Perón - quien marginó de las listas electorales a los sindicalistas-, los militantes de la Tendencia se lanzaron a ocupar espacios de poder en el Estado, quizá suponiendo que el poder real estaba al alcance de la mano. Aliados o simpatizantes suyos ocupaban varias gobernaciones -incluyendo las que eran clave, como la de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza-, dos o tres ministerios, las universidades, que fueron la gran base de movilización de la Juventud Peronista, y muchas otras instituciones y departamentos gubernamentales. Pero pronto se restablecieron las relaciones de fuerza reales. A partir de la renuncia de Cámpora, el 13 de julio de ese año, una a una perdieron las posiciones ocupadas. Primero fueron los ministerios. En enero de 1974, luego de que el ERP realizara un ataque importante contra una guarnición militar en la provincia de Buenos Aires, Perón aprovechó para exigir la renuncia de su gobernador, y poco después promovió un golpe palaciego contra el de Córdoba; la operación siguió después de su muerte, en julio de 1974, cuando cayeron los gobernadores restantes, así como muchos sindicalistas disidentes, y las universidades fueron entregadas para su depuración a sectores de ultraderecha.

Desplazada de las posiciones de poder en el gobierno, la Tendencia revolucionaria se lanzó a la lucha de aparatos, en competencia con el sindicalismo y con los grupos de derecha que rodeaban a Perón. Se trataba de demostrar, de diversas maneras, quién tenía más poder, quién movía más gente y quién pegaba más duro. Dentro de la tradición del peronismo, la movilización callejera y la concentración en la Plaza de Mayo, lugar de la representación

mítica del poder, constituían la expresión del poder popular y el ámbito donde el líder recogía los impulsos del pueblo. En el clima de movilización y enfrentamiento de tendencias, la vieja fiesta popular dominguera se transformó en una demostración de fuerza, en la que las vanguardias debían exhibir su capacidad para organizar al pueblo y convertirlo en una máquina de guerra lanzada a la lucha contra otras falanges igualmente organizadas. Los manifestantes se encolumnaban de manera disciplinada y competían por los lugares más visibles o más cercanos al líder, los carteles o las consignas. En cada una de esas jornadas se libraba una batalla real, como el 20 de junio de 1973, en Ezeiza, donde ante dos millones de personas reunidas para recibir a Perón se peleó a tiros por los espacios, o el 1º de mayo de 1974, cuando los militantes de la Tendencia se enfrentaron con sus competidores y con el mismo Perón y luego abandonaron la Plaza de Mayo dejándola semivacía.

Simultáneamente, la guerra de aparatos se desarrolló bajo la terrible forma del terrorismo, y en particular de los asesinatos, que podían ser, en proporción variable, estratégicos, justicieros o ejemplarizadores. Montoneros se dedicó a eliminar a personajes conspicuos, como José Rucci, secretario general de la CGT y pieza importante en la estrategia de Perón con los sindicalistas, asesinado pocos días después de la elección plebiscitaria de Perón. Contra ellos se constituyó otro terrorismo, con aparatos parapoliciales - nutridos de matones sindicales, cuadros de los grupos fascistas del peronismo y empleados a sueldo del Ministerio de Bienestar Social- que operaban con el rótulo de Acción Anticomunista Argentina, o más sencillamente Triple A. Los asesinatos se multiplicaron y cobraron víctimas en personas relativamente ajenas al combate, pero que servían para demostrar el poder de cada organización.

Por último, la competencia se desarrolló en el ámbito del discurso. Los Montoneros habían hablado en nombre de Perón,



pero, como han mostrado Sigal y Verón, en el peronismo no cabía más que un solo enunciador, aunque tuviera infinitos traductores, más o menos traidores. Maestros en esa traducción cuando Perón estaba en Madrid, los Montoneros debieron enfrentarse con el problema de un líder vuelto al país que, abandonando su cultivada ambigüedad, empezaba a hablar inequívocamente, recordando la ortodoxia peronista, que poco tenía que ver con la “socialista” y denunciando a los “apresurados” e infiltrados. Desde el 20 de junio, el conflicto era público, pero durante un año los Montoneros lograron soslayar la definición: mientras concentraban toda su artillería en los “traidores”, ajenos al peronismo, reinterpretaron hasta donde era posible la palabra de Perón, sosteniendo que se trataba de desvíos puramente tácticos, muestras de la genialidad de un líder que no los desautorizaba en forma explícita, elaboraron la teoría del “cerco” o el “entorno” que impedía a Perón conocer la verdadera voluntad de su pueblo, y se aferraron a la imagen de una “Evita montonera” que debía legitimar su ortodoxia en los orígenes mismos del peronismo. El 1º de Mayo de 1974, se llegó a la ruptura: al abandonar una Plaza de donde el propio Perón los expulsaba, renunciaban a hablar en nombre del Movimiento. Reaparecieron una vez más, apenas dos meses después, en los fantásticos funerales de Perón, y luego pretendieron asumir su herencia, fundando el Partido Peronista Auténtico, sin mayor éxito: la magia se había roto y sólo los seguían los militantes.

Pronto optaron por volver a la vieja táctica y pasaron a la clandestinidad. Hubo más asesinatos, secuestros espectaculares para mejorar sus finanzas -el de Jorge Born les reportó 60 millones de dólares-, intervención en conflictos sindicales, donde la fuerza armada era usada para volcar en favor de los trabajadores las negociaciones con los patrones, y acciones militares de envergadura, pero fracasadas. En ese camino los siguió el ERP, que desde 1974

había instalado un foco en el monte de Tucumán. Contra ambos creció la represión clandestina, que se cebó sobre todo en quienes - intelectuales, estudiantes, obreros, militantes de villas o barrios- habían acompañado la movilización pero no pudieron pasar a la clandestinidad. Desde febrero de 1975, el Ejército, convocado por la presidenta, asumió la tarea de reprimir la guerrilla en Tucumán. El genocidio estaba en marcha.

Por entonces, el gobierno peronista se acercaba a su final. El “rodrigazo” había desatado una crisis económica que hasta el final resultó imposible de dominar: inflación galopante, “corridas” hacia el dólar, aparición de los mecanismos de indexación y, en general, escasas posibilidades para controlar la coyuntura desde el poder. La crisis económica preparó la crisis política. En julio de 1975, ni las Fuerzas Armadas ni los grandes empresarios -a cuyo apoyo había apostado Isabel- hicieron nada para respaldar a la presidenta, a quien ya miraban postumamente. Los empresarios cedieron con facilidad a los reclamos de los sindicalistas, como si se complacieran en fomentar el caos de la economía. Rotos los acuerdos que había construido Perón, los grandes empresarios se separaron de la CGE y atacaron con decisión al gobierno. Hasta entonces, los militares se habían acomodado a los distintos climas del gobierno, sin enfrentarlo: con Cámpora, practicaron el populismo y confraternizaron con la Juventud Peronista; con Perón, tuvieron a su frente a un profesional apolítico, y con Isabel, a otro que simpatizaba con los grupos derechistas del régimen. Pero luego de julio, cuando López Rega cayó en desgracia, comenzaron a prepararse para el golpe. El general Videla, nuevo comandante en jefe, al tiempo que se negaba a respaldar políticamente al gobierno en crisis, le puso plazos -como tantas veces habían hecho antes los militares-, esperó que la crisis económica y la política sumadas consumaran su deterioro y preparó su reemplazo.

Luego de la renuncia de López Rega y de Rodrigo, una alianza de políticos y sindicalistas ensayó una salida: Ítalo Luder, presidente del Senado, reemplazó brevemente a Isabel y se especuló con que el cambio fuera definitivo, por renuncia o juicio político. Antonio Callero, un economista respetado y bien relacionado con los sindicalistas, intentó capear la crisis, pero la inflación desatada, a la que se sumaba una fuerte recesión y desocupación, hicieron imposible restablecer el acuerdo entre gremialistas y empresarios. El Congreso, del que se esperaba que encontrara el mecanismo para remover a la presidenta, tampoco pudo reunir el respaldo necesario. El retorno de Isabel a la presidencia clausuró la posibilidad y a la vez agravó la crisis política que, sumada a la económica, creó una situación de tensión insoportable y una aceptación anticipada de cualquier salida. Muchos peronistas se convencieron de que la caída de Isabel era inevitable y, pensando en el futuro, prefirieron evitar divisiones, acompañándola hasta el fin, el 24 de marzo de 1976, cuando los comandantes militares la depusieron y arrestaron. Como en ocasiones anteriores, el grueso de la población recibió el golpe con inmenso alivio y muchas expectativas.